

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/WGTCP/6
9 de diciembre de 2002

(02-6787)

INFORME (2002) DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA AL CONSEJO GENERAL

ÍNDICE	Párrafos N ^{os}
A. INTRODUCCIÓN	1-3
B. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO.....	4-8
<i>a) Fuentes y materiales utilizados en la labor del Grupo</i>	<i>4</i>
<i>b) Reuniones celebradas en 2002</i>	<i>5-6</i>
<i>c) Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales</i>	<i>7-8</i>
C. ACLARACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL PÁRRAFO 25 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA	9-103
I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, INCLUIDAS LA TRANSPARENCIA, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA EQUIDAD PROCESAL	11-46
II. DISPOSICIONES SOBRE LOS CÁRTELES INTRÍNSECAMENTE NOCIVOS.....	47-64
III. MODALIDADES DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA.....	65-84
IV. APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRESIVO DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA COMPETENCIA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO MEDIANTE LA CREACIÓN DE CAPACIDAD.....	85-102
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 24 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA	103-110
E. INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS NACIONALES.....	111-113
ANEXO 1 TEXTO DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA (WT/MIN(01)/DEC/1), PÁRRAFOS 23-25	
ANEXO 2 COMUNICACIONES PRESENTADAS AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA EN 2002	

A. INTRODUCCIÓN

1. En el año 2002, el Grupo de Trabajo prosiguió su labor bajo la Presidencia del Profesor Frédéric Jenny (Francia), en cumplimiento del mandato contenido en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1). El párrafo 25 está redactado en los siguientes términos:

25. En el período que transcurra hasta el quinto período de sesiones, la labor ulterior en el Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia se centrará en la aclaración de lo siguiente: principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, y disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos; modalidades de cooperación voluntaria; y apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad. Se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas.

2. Como se convino en una reunión informal del Grupo de Trabajo que tuvo lugar el 26 de febrero de 2002, independientemente de la labor que se le encomendaba en el párrafo 25, el Grupo de Trabajo había de centrarse, en cada una de sus reuniones celebradas en 2002, en la cuestión de la asistencia técnica y la creación de capacidad, de conformidad con lo requerido en el párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Doha.¹ De acuerdo con la práctica seguida por el Grupo de Trabajo en años anteriores, en cada reunión se examinó también la cuestión del "Inventario de las ... legislaciones nacionales", como un aspecto del punto "Otros asuntos".

3. En el presente informe se proporciona una visión general de la labor realizada por el Grupo de Trabajo en 2002. El informe complementa los anteriores informes del Grupo sobre sus actividades en 1997 (WT/WGTCP/1), 1998 (WT/WGTCP/2), 1999 (WT/WGTCP/3), 2000 (WT/WGTCP/4) y 2001 (WT/WGTCP/5).

B. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO

a) Fuentes y materiales utilizados en la labor del Grupo

4. Al igual que en los años transcurridos de 1997 a 2001, la labor del Grupo de Trabajo en 2002 se basó en contribuciones escritas de los Miembros y en declaraciones orales y preguntas y respuestas formuladas por los Miembros durante las reuniones del Grupo. Estas aportaciones se complementaron con información recibida de organizaciones intergubernamentales que asistían a las reuniones en calidad de observadores (véase la subsección c) *infra*) y notas de antecedentes preparadas por la Secretaría. En el anexo 2 figura un resumen en forma de cuadro de las contribuciones escritas presentadas al Grupo en 2002.

b) Reuniones celebradas en 2002

5. El Grupo de Trabajo celebró en 2002 cuatro reuniones formales, que tuvieron lugar los días 23 y 24 de abril, 1º y 2 de julio, 26 y 27 de septiembre y 20 de noviembre. La reunión de los días 1º y 2 de julio se convocó inmediatamente antes de una reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Competencia de la UNCTAD, que tuvo lugar los días 3 a 5 de julio de 2002.

¹ Los párrafos 23 a 25 de la Declaración Ministerial de Doha se reproducen en el anexo 1.

6. En la reunión informal del Grupo de Trabajo celebrada el 26 de febrero de 2002, se acordó que los elementos específicos contenidos en el párrafo 25 serían el centro de atención en las distintas reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo en 2002, conforme a lo siguiente:

Primera reunión (23 y 24 de abril):	Apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad.
Segunda reunión (1º y 2 de julio):	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos y modalidades de cooperación voluntaria.
Tercera reunión (26 y 27 de septiembre):	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal.

La principal finalidad de la reunión celebrada el 20 de noviembre fue examinar y adoptar el informe del Grupo de Trabajo (2002) al Consejo General. Los informes sobre cada una de estas reuniones figuran en los documentos WT/WGTCP/M/17, 18, 19 y 20 (que se distribuirán más adelante).

c) Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales

7. En la Declaración Ministerial de Singapur (párrafo 20), se alentó al Grupo de Trabajo a realizar su labor en cooperación con la UNCTAD y otros foros intergubernamentales apropiados para hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles y asegurar que se tomara plenamente en consideración la dimensión del desarrollo. En relación con esto, el FMI y el Banco Mundial han seguido asistiendo a las reuniones del Grupo de Trabajo en calidad de observadores, de conformidad con los acuerdos de cooperación concertados entre la OMC y esas organizaciones. La UNCTAD y la OCDE también han seguido asistiendo a las reuniones en calidad de observadores, sobre la base de una invitación del Grupo de Trabajo. En el curso de las reuniones del Grupo, estas organizaciones lo han puesto al corriente de sus actividades pertinentes y han contribuido al debate. El Grupo de Trabajo agradece sobremedida las valiosas contribuciones que han hecho a su labor las organizaciones observadoras.

8. Como colaboración adicional, las Secretarías de la UNCTAD y la OMC han cooperado estrechamente en la organización y presentación de varios talleres regionales sobre aspectos del mandato de Doha relativo al comercio y la política de competencia celebrados durante el año. La cooperación con la secretaría de la OCDE ha tomado la forma de participación de representantes de cada Secretaría en los talleres u otros eventos convocados por la otra organización. En la parte D, *infra*, se resume información adicional sobre estas actividades. Durante el año, la Secretaría participó también en una reunión de información informal con representantes de la Red Internacional de Competencia, la UNCTAD y la OCDE cuyo objeto fue el intercambio de información sobre las actividades de cada organización.

C. ACLARACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL PÁRRAFO 25 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA

9. En esta sección del informe se proporciona una visión general de la labor sustantiva realizada por el Grupo de Trabajo en 2002, de conformidad con el mandato que se le encomendó en la Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1, párrafo 25). Debido a su naturaleza misma, esta visión general no puede abarcar todo lo dicho en las reuniones ni reflejar todos los matices del debate, que pueden hallarse en las actas detalladas de las reuniones celebradas por el Grupo de

Trabajo durante el año (WT/WGTCP/M/17 a 20) y en las contribuciones escritas de los Miembros (véase el anexo 2).

10. La presente sección se organiza según la manera en que el Grupo de Trabajo estructuró sus deliberaciones, basándose en el párrafo 25 de la Declaración de Doha. Conviene señalar que el debate que tuvo lugar sobre algunas cuestiones puede quedar incluido en el ámbito de varios de los subepígrafes que figuran a continuación. Esto quiere decir que, a fin de comprender plenamente el debate celebrado en algunos casos, puede ser necesario remitirse a más de un subepígrafe de esta sección del informe. Quiere decir también que ha sido imposible evitar ciertas repeticiones al preparar las diversas subsecciones.

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, INCLUIDAS LA TRANSPARENCIA, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA EQUIDAD PROCESAL

11. El Grupo de Trabajo celebró un debate sobre esta cuestión en su reunión de 26 y 27 de septiembre de 2002. Presentaron comunicaciones escritas acerca de este punto los representantes de Nueva Zelandia, Australia, Corea, Tailandia, Suiza, la India (dos contribuciones), el Japón, los Estados Unidos (dos contribuciones) y Sudáfrica (documentos WT/WGTCP/W/210, 211, 212, 213, 214, 215 y 216, 217, 218 y 219, y 220, respectivamente).² Además, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí una nota de antecedentes preparada por la Secretaría (documento W/209) relativa a los principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal. La nota contenía una síntesis de las cuestiones planteadas y los argumentos formulados por los Miembros sobre este tema antes de la reunión del Grupo de 26 y 27 de septiembre, basada en los informes anuales preparados por el Grupo de Trabajo para los cuatro años anteriores y en las comunicaciones escritas de los Miembros. La reunión celebrada los días 26 y 27 de septiembre tuvo también a su disposición una nota anteriormente preparada por la Secretaría sobre los principios fundamentales de la OMC de trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia (documento W/114, distribuido el 14 de abril de 1999). Además, la OCDE presentó un documento no oficial de interés en relación con este punto (posteriormente publicado como documento W/221). Los representantes de la Argentina; el Brasil; el Canadá; China, la Comunidad Europea y sus Estados miembros; Cuba; Egipto; Hong Kong, China; Indonesia; Kenya; Malasia; Marruecos; México; Nigeria; Noruega; la República Checa; y el Taipei Chino, así como los observadores de la Federación de Rusia y la UNCTAD, pronunciaron declaraciones orales o formularon preguntas sobre este punto.

12. El debate sobre este punto abarcó una amplia gama de cuestiones, entre ellas: i) la pertinencia de los principios fundamentales de la OMC para la administración de la legislación y la política de competencia y las posibles ventajas de su incorporación en un marco multilateral sobre legislación y política de competencia; ii) el posible alcance y aplicación de los principios fundamentales enumerados en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, es decir, de la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal; iii) en relación con cada uno de estos principios, las posibles inquietudes relativas a su incorporación en un marco multilateral sobre política de competencia, inclusive con respecto a sus repercusiones en los procedimientos para la observancia de las leyes nacionales de competencia y en las políticas industriales nacionales y otras políticas de los países en desarrollo; iv) los principios adicionales que podían incorporarse en un marco multilateral sobre política de competencia, en particular el trato especial y diferenciado y el alcance integral; y v) los posibles medios de resolver cualesquiera conflictos entre los principios fundamentales de la política de competencia y otras políticas económicas y sociales, inclusive la función de las excepciones y exenciones de la legislación nacional de competencia y/o de un marco multilateral; y otros asuntos.

² En lo sucesivo en el informe, los documentos publicados en la serie WT/WGTCP/W/... se mencionan como "W/..."; los documentos publicados en la serie WT/WGTCP/M/... se mencionan como "M/...".

13. Por lo que se refiere a la importancia de los principios fundamentales de la OMC -que abarcan, aunque sin limitarse necesariamente a ellos, los principios de transparencia, no discriminación y equidad procesal- en la esfera de la política de competencia y/o a la conveniencia de incorporarlos en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia, se señaló que estos principios eran esenciales para la credibilidad y eficacia de esa política.³ Sin estos elementos, un régimen de competencia carecería de credibilidad y autoridad y no obtendría el respeto de la comunidad, por lo que sería ineficaz. La inclusión de los principios en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia respaldaría los esfuerzos de los organismos nacionales que se ocupan de la competencia para aplicar dichos principios y resistirse a las presiones procedentes de fuentes internas, en particular de las empresas y de otras partes del Gobierno, que representaban un problema tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Los principios fundamentales también eran decisivos para el establecimiento de una "cultura de la competencia".⁴ Se señaló asimismo que la inclusión de los principios fundamentales mencionados en un marco de la OMC sobre política de competencia proporcionaría una útil garantía a los comerciantes y los inversores, contribuyendo así al aumento de las corrientes comerciales y de inversión.⁵ De ese modo, un marco multilateral constituiría un complemento de la liberalización del comercio de bienes y servicios, promovería el crecimiento económico mundial y resultaría positivo para todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo.⁶ Se expresó también la opinión de que los tres principios mencionados en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha estaban estrechamente vinculados entre sí y se reforzaban recíprocamente; renunciar a cualquiera de ellos equivaldría a debilitar los demás y el funcionamiento de la política de competencia en su conjunto.⁷

14. Se señaló que la política de competencia, cuando afectaba al comercio, estaba ya sujeta, por lo menos en cierta medida, a los principios de no discriminación, transparencia y equidad procesal, de resultados de las disposiciones generales pertinentes del GATT y del AGCS.⁸ No obstante, dadas las características sin precedentes de la política de competencia y sus diferencias intrínsecas con las cuestiones comerciales tradicionales, era conveniente considerar la posibilidad de aplicar los principios en esta esfera de manera más explícita, teniendo en cuenta el carácter singular de la cuestión.⁹ Se sugirió que podía hallarse un útil precedente de este enfoque en diversos Acuerdos de la OMC vigentes en los que los principios fundamentales se habían adaptado a los rasgos particulares de la materia del acuerdo, por ejemplo del comercio de servicios, la propiedad intelectual o las medidas sanitarias y fitosanitarias.¹⁰ Se señaló también que la incorporación de los mencionados

³ M/19, párrafos 5, 6, 7, 10, 39, 42, 43, 49 y 82.

⁴ M/19, párrafos 14 y 39.

⁵ M/19, párrafos 10 y 39.

⁶ M/19, párrafos 7, 17, 39, 43 y 60.

⁷ M/19, párrafo 14.

⁸ Véanse más detalles acerca del alcance y la aplicación de los principios de trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia en Principios fundamentales de la OMC de trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia (Nota de la Secretaría, documento W/114, distribuido el 14 de abril de 1999).

⁹ M/19, párrafo 7.

¹⁰ M/19, párrafos 7 y 13.

principios en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia no implicaría, en ningún caso, la armonización de las leyes o políticas de competencia.¹¹

15. Se sugirió que existían dos opciones básicas para la incorporación de los principios fundamentales de la OMC en un marco multilateral sobre política de competencia: i) una aplicación limitada de los principios ya implícitos en las normas de la OMC que, por sí sola, representaría un resultado relativamente útil; o ii) una aplicación más amplia de los principios, que informarían la elaboración de políticas y/o leyes de competencia en los países Miembros y proporcionarían un marco para el mayor desarrollo de la labor relativa al comercio y la política de competencia dentro de la propia OMC. Este último enfoque agregaría una dimensión nueva e importante a la elaboración de normas multilaterales, no sólo en el terreno de la política y/o la legislación de competencia sino también en relación con la labor conexa en esferas como los servicios de inversión, los obstáculos técnicos al comercio y la facilitación del comercio.¹²

16. En una exploración más detenida de la función y aplicación de cada uno de los principios mencionados en el párrafo 25 en relación con el principio de transparencia, se señaló que este principio estaba bien establecido en Acuerdos de la OMC como el GATT (artículo X relativo a la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales), el AGCS (artículo III relativo a la transparencia) y el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 63 relativo a la transparencia). Tenía, quizá, especial importancia en relación con las medidas adoptadas dentro de las fronteras, como las leyes y políticas de competencia, ya que era un medio de garantizar que esas medidas no se utilizaran para restringir el comercio. Al mismo tiempo, el recurso a mecanismos de transparencia podía contribuir a asegurar que el alcance y la cobertura de las disciplinas sustantivas contenidas en un acuerdo no representaran una injerencia innecesaria, garantizando así el establecimiento de un equilibrio apropiado. Determinados aspectos de la transparencia, incluida la publicación de las leyes, los reglamentos y las directrices de aplicación general, podían implicar costos administrativos y, por lo tanto, tendrían consecuencias en relación con la creación de capacidad. No obstante, la elaboración de procedimientos transparentes y la existencia de un marco legislativo transparente constituían un requisito fundamental para promover el cumplimiento de la ley y establecer una institución encargada de la observancia digna de crédito. En ese sentido, la inclusión de obligaciones de transparencia adecuadamente formuladas en un acuerdo multilateral sobre política de competencia contribuiría al logro de los objetivos tanto del sistema multilateral de comercio como de una observancia de la legislación de competencia creíble y eficaz.¹³

17. En la esfera de la política de competencia, el compromiso en materia de transparencia se aplicaría a las leyes, los reglamentos y las directrices de aplicación general. Los Miembros de la OMC tendrían la obligación de asegurarse de que esas leyes, reglamentos y directrices se publicaran en forma completa y oportuna. Dicha publicación podría realizarse en una gaceta o diario oficial o un órgano similar o quizá en un sitio de la red accesible al público.¹⁴ Esta obligación de transparencia "externa" se aplicaría no sólo a las leyes, los reglamentos y las directrices sino también a las exclusiones y exenciones sectoriales. Estas exclusiones y exenciones podían representar importantes factores determinantes de la adopción de decisiones comerciales por las empresas. Por consiguiente, la transparencia en relación con estas cuestiones podía ser uno de los factores que en último término darían lugar a un aumento de las corrientes de inversión extranjera directa.¹⁵

¹¹ M/19, párrafo 33.

¹² M/19, párrafo 4.

¹³ M/19, párrafo 39.

¹⁴ M/19, párrafo 40.

¹⁵ M/19, párrafo 40.

Otro aspecto de la transparencia sería la obligación de los Miembros de la OMC de notificar a la Organización sus leyes, reglamentos y directrices y sus exclusiones y exenciones sectoriales.¹⁶ Podría ser útil que esas notificaciones fueran dirigidas al comité de política de competencia de la OMC que habría de establecerse para administrar el acuerdo propuesto.¹⁷ Se señaló también que, en principio, la transparencia debía impregnar todos los aspectos del régimen de competencia de un país, inclusive la legislación, las políticas, las estructuras institucionales, los procesos de adopción de decisiones, las prioridades en materia de observancia, las directrices de política y de procedimiento, los criterios para la selección de casos, los criterios de exención, los procedimientos de apelación, y los detalles de todos los resultados y decisiones pertinentes.¹⁸ Al mismo tiempo, las obligaciones en materia de transparencia debían definirse de tal manera que no resultaran excesivamente gravosas.¹⁹ A este respecto, en lo que concierne a la cuestión de someter a la obligación de notificación las decisiones sobre casos determinados relacionadas con la legislación de competencia que tienen un valor de precedente vinculante, se sugirió que podía hallarse la forma de darlas a conocer al público en general.²⁰ Se sugirió también que se proporcionara a los países en desarrollo tiempo y flexibilidad suficientes para establecer progresivamente la transparencia en la administración y la observancia de sus leyes de competencia²¹, por ejemplo, mediante medidas de transición.²² También podían identificarse como esferas prioritarias para las actividades de asistencia técnica y creación de capacidad determinados elementos de una posible disposición sobre transparencia.²³

18. Se expresó también la opinión de que la protección de la información confidencial, inclusive de los secretos comerciales y empresariales, sería una excepción fundamental a una posible incorporación del principio de transparencia en un marco multilateral sobre política de competencia.²⁴ De hecho, las aplicaciones del principio de transparencia vigentes en la OMC incluían por lo general una excepción relativa a la información confidencial, que los Miembros normalmente llevaban a la práctica en forma compatible con sus propias leyes y tradiciones jurídicas.²⁵

19. Se formularon preguntas y se expresaron inquietudes y/o reservas acerca de la propuesta de incorporar el principio de transparencia en un marco multilateral sobre política de competencia.²⁶ En cuanto a las cuestiones referentes al alcance y la cobertura, se consideró que requerían un examen cuidadoso. En lo relativo al posible criterio de si una decisión sobre un caso determinado tenía valor de precedente, por lo menos en las jurisdicciones en las que se aplicaba el derecho consuetudinario, se

¹⁶ Véanse más observaciones sobre el tratamiento de las excepciones, exenciones y exclusiones de la legislación de competencia en el documento M/19, párrafos 5, 9, 13, 38, 40, 47 y 50.

¹⁷ M/19, párrafo 40.

¹⁸ M/19, párrafos 5, 9 y 58.

¹⁹ M/19, párrafos 23, 24, 27, 28, 29 y 54.

²⁰ M/19, párrafo 62.

²¹ M/19, párrafos 24, 39 y 61.

²² M/19, párrafo 45.

²³ M/19, párrafo 39.

²⁴ M/19, párrafos 5, 11, 12, 45, 48, 50, 51 y 58.

²⁵ M/19, párrafo 23.

²⁶ M/19, párrafos 22, 23, 24, 27, 29, 53, 55 y 73.

dijo que esta categoría de decisiones era sumamente amplia porque todas las decisiones de organismos y tribunales -por lo menos, las que se hacían públicas- podían constituir un precedente. Por consiguiente, con arreglo a este criterio, cualquier decisión de los tribunales de los Estados Unidos -no sólo en los asuntos iniciados por la administración sino también en los incoados por partes privadas- podía quedar sujeta a la obligación de notificación.²⁷ La obligación de hacer públicas y notificar las políticas y decisiones no adoptadas expresamente como "legislación sobre competencia" pero que, no obstante, influían de hecho en la competencia también podía resultar gravosa.²⁸ Se expresó la opinión de que como mínimo, eran necesarios más estudios y debates a fin de que los países en desarrollo pudieran estimar en forma más realista los costos y las ventajas de esas disposiciones antes de que los Ministros adoptaran una decisión sobre las modalidades de las negociaciones.²⁹ No obstante, no sería posible evaluar en forma realista los efectos de una prescripción en materia de transparencia hasta que el Grupo tuviera una idea adecuada de las obligaciones sustantivas específicas que podría imponer un posible acuerdo de la OMC sobre competencia.³⁰ En cuanto a la confidencialidad, se expresó la opinión de que podría ser difícil mantener el debido equilibrio en esta esfera dadas las diferencias entre los entornos legales, políticos e institucionales de los Miembros.³¹

20. En respuesta a estas preocupaciones, se expresó la opinión de que en la medida en que los Miembros hicieran públicas sus decisiones sobre casos determinados, podía hallarse alguna forma de notificación que no resultara gravosa. Con las sugerencias y la participación positiva de los Miembros, sería posible definir un conjunto práctico de obligaciones en materia de transparencia que resultaran útiles y, sin embargo, no fueran excesivamente gravosas, como se había hecho, por lo demás, en otras esferas de la OMC. La idea de centrarse en las decisiones sobre asuntos determinados que pudieran constituir un precedente sólo era una posible solución. Lo fundamental sería que, una vez que se hubiera establecido el marco general para la transparencia, la manera en que éste se aplicara tuviera en cuenta las realidades y la diversidad de los ordenamientos jurídicos nacionales. Se sugirió que sólo quedara sujeta al mecanismo de solución de diferencias de la OMC la existencia de determinados procedimientos básicos y no la cuestión de si esos procedimientos se habían aplicado en la forma debida en un asunto concreto. En otros términos, la distinción entre las violaciones *de jure* y *de facto* se aplicaría al principio de transparencia al igual que al de no discriminación.³² Se sugirió también otro posible método consistente en establecer una base de datos sobre legislación y política de competencia, que constituiría una fuente práctica y unificada a la que podrían recurrir todos los Miembros. Se hizo referencia, a este respecto, al ejemplo de la base de datos sobre política y legislación de competencia del APEC, elaborada por el Taipei Chino, que contenía declaraciones de política, leyes, reglamentos y directrices sobre competencia, procedimientos para la tramitación de los asuntos y decisiones de todos los miembros del APEC.³³ En cuanto al tratamiento de la información confidencial, se señaló que no se definía en ninguno de los Acuerdos de la OMC vigentes; no obstante, en los Acuerdos se hacían varias referencias a la protección de la información confidencial con arreglo a lo previsto por las leyes nacionales. Los grupos especiales se habían remitido

²⁷ M/19, párrafo 62.

²⁸ M/19, párrafo 28.

²⁹ M/19, párrafos 23 y 27.

³⁰ M/19, párrafos 28 y 62.

³¹ M/19, párrafo 23.

³² M/19, párrafo 63; véase el debate conexo, *infra*.

³³ M/19, párrafo 64.

uniformemente a las leyes nacionales, que eran coherentes en sí mismas y preveían este tipo de protección.³⁴

21. En lo relativo al principio de no discriminación, se señaló que tenía dos componentes: el trato de la nación más favorecida y el trato nacional.³⁵ En el contexto de la aplicación de las leyes nacionales de competencia, se sugirió que el principio NMF no plantearía grandes problemas; era prácticamente inconcebible que una autoridad aceptara determinadas prácticas anticompetitivas de las empresas originarias de un país y las prohibiera a las empresas originarias de otros países.³⁶ Por otra parte, podían surgir cuestiones relacionadas con el rango jurídico de los acuerdos de cooperación bilaterales y regionales en relación con el trato NMF, que tendrían que aclararse. El principio del trato nacional planteaba toda una gama de problemas que sería necesario examinar.³⁷

22. Con respecto al alcance y aplicación del principio de no discriminación tal como se concretaría en un marco multilateral sobre política de competencia, delegaciones que apoyaban el desarrollo de ese marco opinaron que una disposición sobre no discriminación debía aplicarse sólo a la discriminación *de jure*, es decir, a la incorporada en leyes, reglamentos y directrices de aplicación general, y no a los casos de discriminación *de facto*.³⁸ Esto no implicaba que estos últimos no fueran causa de inquietud; no obstante, por el momento resultaba difícil distinguir entre los posibles casos de discriminación *de facto*, por una parte y, por la otra, la aplicación del criterio de razonabilidad en las circunstancias particulares del mercado, y la aplicación razonable de las facultades discrecionales para el ejercicio de la acción fiscal, basadas en factores objetivos.³⁹ También se observó que se debía velar por que la aplicación de los principios incorporados en un marco multilateral sobre política de competencia *no* rebasara los límites que separaban a este campo de otros, como el de la política industrial, aunque estos otros pudieran, en algunos casos, estar ya abarcados por disciplinas vigentes de la OMC.⁴⁰

23. Se señalaron cierto número de cuestiones, inquietudes o reservas con respecto a la propuesta de incorporar el principio de no discriminación en un marco multilateral sobre la política de competencia. Acerca de las posibles consecuencias del trato NMF para los arreglos de cooperación existentes en los planos bilateral y regional, se expresó la opinión de que era importante preservar el ámbito necesario para esos arreglos. Característicamente, el nivel y modalidades de la cooperación internacional, la asistencia voluntaria y el intercambio de información variaban según el sistema jurídico del país Miembro, su sistema destinado a asegurar la observancia de la legislación sobre competencia y el grado de experiencia en la esfera de esa legislación.⁴¹ Por consiguiente, una cláusula de no discriminación en un posible marco de la OMC sobre política de competencia no había de forzar a las autoridades de defensa de la competencia a aplicar condiciones iguales para proporcionar asistencia encaminada a asegurar la observancia de las leyes a todas sus contrapartes, o para

³⁴ M/19, párrafo 68.

³⁵ M/19, párrafos 6 y 47.

³⁶ M/19, párrafo 13.

³⁷ M/19, párrafos 14 y 53.

³⁸ M/19, párrafos 8, 36 y 44.

³⁹ M/19, párrafos 7, 36, 44 y 65.

⁴⁰ M/19, párrafo 36.

⁴¹ M/19, párrafo 11.

intercambiar información con todas ellas. Podría necesitarse una salvaguardia expresa para que este punto quedara aclarado.⁴² Por otro lado en la medida en que la cooperación se considerase voluntaria y, por consiguiente, no sujeta a compromisos vinculantes en ningún acuerdo de la OMC sobre política de competencia, podría no haber necesidad de una exención expresa.⁴³ De acuerdo con una opinión relacionada con la anterior, podrían preverse ciertas medidas de procedimiento a fin de establecer incentivos para el aumento de los contactos, con el propósito de que no quedaran excluidos *a priori* de la cooperación determinados países, trabajando así de acuerdo con el espíritu del principio NMF. Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante un compromiso de responder a las peticiones de otros Miembros de la OMC para la cooperación en casos determinados, y explicar las razones en caso de que la petición no pudiera tomarse en consideración.⁴⁴ También se opinó que, en aras de la transparencia, los acuerdos de cooperación bilaterales y regionales debían notificarse a la OMC.⁴⁵

24. Se hizo observar que los principios de no discriminación de la OMC se aplicaban en general a productos y servicios "similares"; no obstante, el análisis de la competencia y las correspondientes medidas de observancia dependían del caso de que se tratara, y dos situaciones dadas no eran ni serían enteramente análogas o comparables. Así pues, en la práctica, era difícil determinar si existía una discriminación *de facto* con respecto a las medidas encaminadas a asegurar la observancia de la legislación antimonopolio, dado que tales acciones se basaban en las circunstancias de casos determinados. Incluso si la aplicación de los principios de trato nacional y NMF de la OMC se limitara a la discriminación *de jure*, como se proponía ahora, seguirían planteándose diversas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo debían tratarse las excepciones sectoriales a las normas de competencia? La mayoría de los países, si no todos, exceptuaban a ciertos sectores de la aplicación de las normas antimonopolio o los regulaban mediante una legislación sectorial que reemplazaba a tales normas o se añadía a éstas. En el artículo XX del GATT se preveían excepciones o exenciones fundadas, por ejemplo, en la protección de la moral pública o de la salud humana, y en la observancia de la ley. No obstante, ¿debía ocuparse de éstas un futuro capítulo de la OMC sobre competencia?; y en caso afirmativo, ¿debían abordarse los factores particulares del contexto de la competencia, como el estado de liberalización de la economía nacional, o si existía o no una supervisión reglamentaria nacional eficaz con respecto a las excepciones?⁴⁶

25. Acerca de las posibles consecuencias que experimentarían los países en desarrollo, se expresó la opinión de que era a veces necesario, en aras del desarrollo, aceptar ciertas prácticas anticompetitivas (tales como una discriminación contra una empresa extranjera), o ciertas fusiones, a fin de obtener resultados benéficos a largo plazo. Por tales razones, debía eximirse a los países en desarrollo de la aplicación del principio de trato nacional en cualquier acuerdo multilateral sobre política de competencia⁴⁷ o, por lo menos, estos países debían gozar de una flexibilidad apropiada.⁴⁸ Se requería flexibilidad, entre otras razones, debido a que en las economías de la mayoría de los países en desarrollo predominaban las empresas pequeñas y medianas, cuyas repercusiones en el mercado eran insignificantes. La cuestión consistía en saber cómo podían las pequeñas empresas de

⁴² M/19, párrafo 6.

⁴³ M/19, párrafos 37 y 44.

⁴⁴ M/19, párrafo 13.

⁴⁵ M/19, párrafo 15.

⁴⁶ M/19, párrafo 22.

⁴⁷ M/19, párrafo 26.

⁴⁸ M/19, párrafos 29, 58 y 61.

los países en desarrollo mantener su viabilidad competitiva al aplicarse el principio de no discriminación, a fin de que no fueran eliminadas por las actuales tendencias a las fusiones y adquisiciones de las empresas multinacionales que tendían a crear monopolios y favorecer las prácticas anticompetitivas. El principio de no discriminación podía ser objeto de abusos si no se aplicaba en forma correcta; por consiguiente, en caso de que debiera aplicarse, ello sólo debía tener lugar caso por caso, a fin de no hacerlo en aquellas situaciones en que estuviera en conflicto con los objetivos de desarrollo de los países.⁴⁹ Debido a la mundialización, las empresas nacionales se veían ya enfrentadas con una intensa competencia extranjera. Debía concederse a las industrias de los países en desarrollo tiempo suficiente para desarrollar una capacidad que les permitiera enfrentar la competencia internacional.⁵⁰

26. Se expresó también la opinión de que las razones habitualmente invocadas para explicar por qué el trato nacional constituía un aspecto importante de la no discriminación en el contexto de la política comercial, no eran necesariamente aplicables en el contexto de la política de competencia. En primer lugar, el trato nacional estaba destinado a asegurar que las concesiones efectuadas por los Miembros con respecto a los obstáculos al comercio en la frontera no resultasen anuladas por una discriminación dentro de las fronteras entre las mercancías importadas y las producidas en el país. Las fusiones y las restricciones verticales a menudo tenían efectos anticompetitivos tanto sobre los productores nacionales como sobre los extranjeros. No obstante, era difícil advertir cómo constituían un bloqueo desleal del acceso de las importaciones al mercado, que es a lo que se refería el principio de trato nacional. En segundo lugar, el trato nacional estaba concebido para apoyar la liberalización del comercio, que era deseable porque, en su conjunto, se estimaba beneficiosa para los países participantes. La política de competencia, en cambio, se enfrentaba por definición con la competencia imperfecta, en la cual la presunción a favor del libre comercio era mucho menos neta. La política de competencia con respecto a las fusiones y cárteles podría tener efectos diferentes sobre el bienestar en países diferentes, según el lugar en que estuvieran establecidos los productores y los consumidores. Dado que los países en desarrollo tenían pocos productos que se exportaban en condiciones de competencia imperfecta, se hallarían probablemente en la mayor parte de los casos en el lado perdedor frente a las fusiones y las prácticas comerciales restrictivas con efectos transfronterizos, y podrían tener poco que ganar de la aplicación del principio de trato nacional en la legislación sobre competencia de los países desarrollados. Una tercera justificación del principio de trato nacional en los acuerdos comerciales consistía en que, incluso en los casos en que un país pudiera obtener ventajas unilateralmente al apartarse del libre comercio, esas ventajas se convertirían en pérdidas si otros países actuasen de la misma manera. No obstante, no se había demostrado que los apartamientos de la norma en la esfera de la política de competencia internacional podrían ser mutuamente destructivos del mismo modo. Estas distinciones entre el principio de trato nacional tal como se aplica al comercio de mercancías y su aplicabilidad potencial a la política de competencia, ponían en duda lo apropiado de trasladar ese principio al campo de esta política. Además, gran parte del debate que había tenido lugar hasta el momento en el Grupo de Trabajo se basaba en la idea de que el único objetivo del acuerdo multilateral era promover la eficiencia estática en la asignación de recursos. En los países en desarrollo, donde tanto los recursos privados como los públicos para la labor de investigación y desarrollo eran limitados, el fomento de la inversión podía exigir un grado estable de concentración económica. Podía confiarse en los efectos de una creciente exposición al comercio internacional, como consecuencia de la liberalización del comercio, para poner un freno al poder de mercado y limitar la mala asignación estática de los recursos. En cualquier supuesto, muchos países en desarrollo Miembros tenían poca experiencia o conocimientos en el campo de la política de competencia. Esto significaba que los principios de la legislación sobre competencia provenientes de países con una experiencia mucho mayor, además de ser posiblemente inapropiados

⁴⁹ M/19, párrafo 29.

⁵⁰ M/19, párrafos 25 y 53.

por sí mismos para los países en desarrollo, entrañarían mayores costos para su observancia. Los países en desarrollo tampoco tenían aún el tipo de redes de seguridad bien establecidas que existían en los países industrializados para proteger a los desplazados por la competencia de las importaciones. Existía por tanto una mayor necesidad de amortiguar el impacto de esa competencia mediante medidas apropiadas de reestructuración industrial, que también permitirían a los países en desarrollo liberalizar más su comercio. En tal sentido, una política de competencia discriminatoria podría ser concomitante con una política comercial no discriminatoria. En el contexto de la atención de las necesidades de los países en desarrollo, era más conveniente adoptar el concepto de no discriminación teniendo presente la necesidad de tratar de una manera diferencial a países diferentes con capacidades diferentes, así como la necesidad y responsabilidad de proporcionar asistencia, adoptar medidas positivas y desarrollar una acción afirmativa con respecto a las empresas e instituciones de esos países, a fin de asegurar su viabilidad y desarrollo, para que pudieran ser cada vez más eficientes y competitivos.⁵¹

27. Se expresó también la opinión de que el enfoque que se había adoptado para definir la no discriminación y otros principios fundamentales, que podían incluirse en un marco multilateral sobre política de competencia, era hasta el momento básicamente defectuoso en cuanto se centraba en el comercio interno más bien que en el transfronterizo. Por ejemplo, se había utilizado el concepto de no discriminación de manera intercambiable con el de "trato nacional", que se refería a la aplicación de un trato igual a las empresas extranjeras y nacionales que operaban dentro del mercado nacional. Esta era una concepción que serviría a los intereses de quienes tenían inversiones importantes en el extranjero y deseaban garantizar el acceso a los mercados de los países en que invertían. La mayoría de los países en desarrollo, en cambio, eran importadores y exportadores, más que inversores. Así pues, la prioridad en la aplicación de los principios fundamentales ha de centrarse en primer lugar en el comercio transfronterizo. La legislación sobre la competencia no debía discriminar entre las empresas que eran exportadoras y las que no lo eran. En otras palabras, si la legislación nacional sobre competencia prohibía la manipulación de licitaciones y los acuerdos de fijación colusoria de precios o de volúmenes, los cárteles de exportación debían estar sujetos a las mismas disposiciones. El uso de cárteles de exportación como estrategia de política comercial para extraer "rentas" de los países extranjeros era inadmisible. Si la Declaración Ministerial de Doha era verdaderamente un programa para el desarrollo, debía darse prioridad a la cuestión del comercio desleal transfronterizo, y no a la del comercio desleal interno.⁵²

28. En respuesta a lo antedicho, se opinó que no todas las formas de trato diferente o diferenciado eran por sí mismas discriminatorias; en realidad, podría haber gran cantidad de razones por las cuales un gobierno deseara tratar a actores económicos diferentes de manera diferente. La observación que hacían las delegaciones que apoyaban la incorporación del principio de no discriminación en un marco multilateral sobre política de competencia era simplemente que, como cuestión de principio, el motivo del trato diferenciado no podía ni debía ser la nacionalidad. Se manifestó confianza en que la mayoría de los Miembros compartían esta opinión, que en realidad se basaba en los principios fundadores de la OMC. También podría suceder que en algunos casos los actores económicos que un gobierno trataba de determinada manera fueran todos extranjeros. Por ejemplo, como habían señalado algunos países en desarrollo, la estructura económica de un país podría no estar suficientemente diversificada o desarrollada, y en determinados campos las empresas con determinadas características podrían ser todas extranjeras. Probablemente ello no constituiría por sí mismo una discriminación; no obstante, las razones en que se fundaba el trato diferente tenían que basarse en factores de política objetivos. Con respecto al argumento, que se había invocado, de que algunos Miembros podían estar en condiciones de garantizar una no discriminación *de facto*, pero no *de jure*, se entendía que esto

⁵¹ M/19, párrafo 17.

⁵² M/19, párrafo 12.

significaba que los Miembros podían no saber por adelantado cuándo necesitarían aplicar un trato diferenciado. No obstante, las exclusiones y exenciones *a priori* no eran los únicos instrumentos que permitirían hacerlo. Existían también cláusulas relativas al interés público y varios otros instrumentos de política que podían utilizar los Miembros que tuviesen establecida una autoridad de defensa de la competencia. Con arreglo a la norma propuesta, esos instrumentos serían admisibles, siempre que se aplicaran de manera transparente.⁵³

29. Con respecto al argumento de que las normas de la OMC debían centrarse en el comercio transfronterizo más bien que en el interno, se expresó la opinión de que tal distinción era insostenible en la práctica. Todo comportamiento anticompetitivo que estuviese vinculado con el comercio o la inversión transfronterizos estaría necesariamente relacionado con factores económicos internos; los únicos casos en que esto no sucedía eran aquellos en que no había importaciones, exportaciones o inversión extranjera directa en una esfera determinada o en relación con un producto determinado, por lo cual el comercio se desarrollaba exclusivamente en el ámbito interno. Si un país decidía no aplicar la legislación sobre competencia a esa particular situación, la OMC probablemente no tendría nada que decir acerca de ello, ya que se trataría de una decisión puramente nacional. No obstante, en la mayoría de las situaciones existiría una dimensión transfronteriza de uno u otro tipo.⁵⁴ En respuesta a este argumento, se observó que hasta el momento los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo parecían concentrarse principalmente en situaciones en las cuales las prácticas anticompetitivas estaban relacionadas con inversiones, lo que significaba una presencia comercial. Esto exigía centrarse en la nacionalidad de las empresas que ya estaban operando dentro del país de origen o del país de establecimiento. No obstante, existían muchas prácticas desleales relacionadas con el movimiento transfronterizo de las mercancías, es decir, exportaciones e importaciones, en particular en el caso de los cárteles, y por tanto sería conveniente centrarse más en tales movimientos.⁵⁵

30. Con respecto al principio de la equidad procesal, se manifestó la opinión de que un rasgo común de todos los regímenes eficaces de política de competencia era que incluían garantías de reconocimiento y respeto de los derechos de las partes frente a las decisiones desfavorables y a las sanciones. Tales garantías podían variar tanto en su contenido como en su forma, ya que reflejaban los instrumentos del sistema jurídico y las tradiciones que habían generado el régimen de competencia. Eran de interés en este aspecto cuatro categorías generales de garantías. En primer lugar, debía haber garantías relativas al acceso al sistema. Esto podía entrañar, por ejemplo, el derecho de las empresas a tomar conocimiento de que la autoridad de defensa de la competencia había iniciado una investigación oficial contra ellas, y en qué consistían las objeciones de esa autoridad a su conducta. Una segunda garantía fundamental estaba relacionada con la defensa de las empresas afectadas. Éstas debían tener oportunidad y tiempo suficientes para hacer conocer sus opiniones a la autoridad por escrito o mediante la participación en audiencias, para presentar pruebas o documentos y para producir prueba testimonial que corroborara su descripción de los hechos. Este tipo de garantía incluiría normalmente algún derecho de acceso al expediente formado por la autoridad. Una tercera garantía era el reconocimiento del derecho de las empresas intervinientes en procedimientos relativos a la competencia a obtener el reexamen de las decisiones que las afectaran por un órgano judicial independiente. Por último, también debía garantizarse la protección de la información confidencial, incluidos los secretos comerciales. No era menester que estas garantías básicas estuviesen armonizadas en todos los regímenes, pero las mismas debían describirse en un futuro acuerdo con cierta claridad.⁵⁶ Según otra opinión, podían identificarse cuatro conceptos generales que

⁵³ M/19, párrafo 66.

⁵⁴ M/19, párrafo 67.

⁵⁵ M/19, párrafo 67.

⁵⁶ M/19, párrafo 41.

probablemente promoverían la equidad, a saber: i) el derecho de acceso y de petición a la autoridad de defensa de la competencia; ii) el derecho de una empresa sometida a investigación a conocer el fundamento de una objeción de la autoridad antimonopolio antes de que esa autoridad adoptara una medida, y el derecho de responder a esa objeción; iii) el derecho de apelar contra una decisión del organismo, y iv) la realización de los actos en tiempo oportuno.⁵⁷

31. Se plantearon diversas cuestiones, inquietudes o reservas con respecto a la propuesta de incorporar el principio de la equidad procesal en un marco multilateral sobre la política de competencia. Se observó que no existía por el momento un consenso amplio sobre el significado de la equidad procesal en el contexto de la observancia de la legislación de competencia. Esto se debía en parte a que el concepto de equidad procesal difería de un sistema jurídico a otro y a que en él influía también la cultura política y jurídica en la que actuaban los organismos correspondientes.⁵⁸ Asimismo, se formularon diversas preguntas concretas con respecto al modo en que se aplicaría en la práctica el principio de equidad procesal, entre ellas las siguientes: ¿Quién tendría derecho de acceso al sistema? ¿Tendrían todos igual derecho de acceso, o podrían conferirse derechos más amplios a determinadas categorías de partes, tales como los clientes de las empresas que eran objeto de investigación? ¿Debía exigirse a la autoridad de defensa de la competencia que reconociera derechos procesales a terceros que podrían, por ejemplo, resultar perjudicados por una fusión, aunque no en el tradicional sentido antimonopolio? ¿Se exigiría a los organismos de los Miembros cuyos sistemas jurídicos reconocieran de manera amplia el derecho de incoar directamente ante los tribunales acciones privadas basadas en la legislación sobre competencia, que proporcionaran el mismo grado de acceso formal al organismo que aquellos cuyos sistemas jurídicos no lo hiciesen? ¿Se exigiría a todos los Miembros que reconocieran derechos de acción privada? Con respecto al derecho a la respuesta, ¿qué forma debería tomar en la práctica? ¿Deberían las objeciones notificarse formalmente y por escrito, o ello podría hacerse de manera más informal? En cuanto al derecho de apelación y la función del poder judicial, ¿qué tipos de decisiones debían estar sujetas a revisión?

32. En relación con las consecuencias del principio de equidad procesal para los países en desarrollo, se expresó la inquietud de que las propuestas sobre la materia pudieran exigir a un Miembro que estableciera y mantuviese un marco judicial para el trámite de las apelaciones. De manera análoga, las exigencias de una notificación integral de la legislación sobre competencia y de la información conexa tanto al público como a la OMC podrían requerir gran cantidad de recursos. Era menester realizar más estudios y debates a fin de que los países en desarrollo pudieran evaluar de manera más realista los costos y beneficios de tales disposiciones antes de que los Ministros decidieran sobre las modalidades de las negociaciones.⁵⁹ Entre otros asuntos, sería útil aclarar si el artículo X del GATT era una referencia apropiada para el debate de esta cuestión en el Grupo de Trabajo o si había de elaborarse un concepto más específico de equidad procesal en relación con la política de competencia.⁶⁰ En cualquier supuesto, era importante que en el examen de esta cuestión, si hubiera que abordarla, se tuviera en cuenta la diversidad de culturas jurídicas de los Miembros, así como las prácticas establecidas en los sistemas judiciales nacionales y las autoridades de defensa de la competencia, donde estas últimas existían.⁶¹

⁵⁷ M/19, párrafo 18.

⁵⁸ M/19, párrafo 18.

⁵⁹ M/19, párrafos 27 y 28.

⁶⁰ M/19, párrafo 54.

⁶¹ M/19, párrafos 15, 28 y 63.

33. En respuesta a las referidas inquietudes, se expresó la opinión de que todos los sistemas de competencia -por diferentes que fueran- respetaban ciertos criterios básicos de equidad. Además, la experiencia en otros campos de la OMC había demostrado que la equidad procesal podía tratarse de manera simple y práctica, sin dejar de tener en cuenta la evidente diversidad de las culturas y sistemas jurídicos de los Miembros. En la cuestión de la revisión judicial, por ejemplo, había diversas disposiciones de los Acuerdos de la OMC que estipulaban la obligación de prever tal revisión que no implicaban injerencia alguna en cuanto a la manera en que las revisiones judiciales estaban organizadas en un país determinado, o en el alcance de las mismas. En la práctica, estas disposiciones no habían creado problemas del tipo que se había mencionado, y habían sido útiles para asegurar a comerciantes e inversores que los sistemas nacionales de países sobre los cuales a menudo tenían, en el mejor de los casos, un conocimiento limitado, respetaban ciertas normas fundamentales.⁶²

34. Con respecto a un aspecto concreto del debate, se expuso la opinión de que incluso las normas de equidad procesal más básicas que podrían preverse en un acuerdo multilateral, podían plantear problemas para los procedimientos nacionales encaminados a asegurar la observancia de las leyes. Por ejemplo, una de las normas básicas entrañaría el derecho a recibir una notificación de una investigación. Esto no plantearía ningún problema si la notificación exigida debía dirigirse a la parte investigada, pero la situación sería diferente si se tratara de una notificación general, por ejemplo a la OMC, a los Miembros de la Organización, o a una y otros. Era práctica de algunos Miembros no revelar públicamente la existencia de una investigación cuando no se había establecido que la parte objeto de ésta hubiera cometido incorrección alguna, a fin de respetar los derechos de aquélla.⁶³ En respuesta, se aceptó la observación de que era necesario distinguir claramente entre la notificación de las investigaciones a las partes y la notificación a la OMC. No obstante, uno de los elementos esenciales de la equidad procesal era que la parte objeto de una investigación fuese notificada. Para demostrar que cumplían con una obligación de equidad procesal en la OMC, los Miembros debían simplemente estar en condiciones de demostrar que habían previsto que las partes objeto de una investigación fuesen notificadas de manera apropiada.⁶⁴ Se sugirió también que cualquier marco multilateral eventual sobre política de competencia que se adoptara no fuera vinculante. En ese contexto, la cuestión de las obligaciones relativas a la equidad procesal no se plantearía.⁶⁵

35. Con respecto a los principios adicionales que podrían incorporarse en un marco multilateral sobre política de competencia, se indicó que uno de esos principios esenciales era el de trato especial y diferenciado.⁶⁶ Entre las posibles dimensiones de este principio se contaba el aumento de las oportunidades comerciales de los países en desarrollo, la salvaguardia de sus intereses de desarrollo, la flexibilidad de cualquier compromiso que asumieran los países en desarrollo y los menos adelantados, y la previsión de períodos de transición.⁶⁷ Se expresó la opinión de que debían incluirse disposiciones relativas al desarrollo que estuviesen claramente vinculadas con las dimensiones del

⁶² M/19, párrafos 41, 42 y 68.

⁶³ M/19, párrafo 69.

⁶⁴ M/19, párrafo 69.

⁶⁵ M/19, párrafo 26.

⁶⁶ M/19, párrafos 12, 15, 29, 32, 50, 52, 53, 55, 56, 61 y 71.

⁶⁷ En la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo en el mes de abril, el observador de la OCDE señaló a la atención del Grupo distintos tipos posibles de trato especial y diferenciado, como el enfoque seguido en el AGCS, las excepciones, exenciones y exclusiones, el enfoque plurilateral, la previsión de períodos de transición y el suministro de asistencia técnica, etc. (véase M/17, párrafo 41).

comercio, y que estuvieran por tanto estrechamente relacionadas con el mandato de la OMC.⁶⁸ Además, el trato especial y diferenciado implicaba que debía concederse tiempo a los países en desarrollo para aplicar un régimen de competencia y cualquier compromiso conexo, y que el tiempo concedido debía depender del nivel de desarrollo del país.⁶⁹ Asimismo, debía concederse a los países en desarrollo un período de tiempo para incorporar los principios de transparencia y debido proceso en la aplicación de la legislación sobre competencia y en los medios para asegurar su observancia.⁷⁰ También se expuso la opinión de que debía permitirse a los países en desarrollo eximir a los cárteles de exportación nacionales e internacionales, ya que la mayoría de las empresas exportadoras e importadoras de esos países eran de pequeño tamaño y podrían tener que reunirse para contrarrestar el poder de negociación de grandes compradores o vendedores pertenecientes a países industrializados. Por lo que se refería a las fusiones y adquisiciones, debía preverse un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo que permitiera a sus economías y empresas alcanzar una masa crítica, con lo que podrían estar en condiciones de competir en pie de igualdad con empresas del mismo tamaño en los mercados internacionales.⁷¹

36. Se hizo observar que, al infundirse contenido al principio de trato especial y diferenciado, podría facilitarse el logro de un acuerdo sobre el sentido y alcance apropiados de la equidad procesal y de los demás principios fundamentales.⁷² También se manifestó la opinión de que el trato especial y diferenciado no debía necesariamente estar reservado a los países en desarrollo. En lugar de ello, podría adoptarse una actitud flexible con respecto a todos los países que carecieran de legislación sobre competencia⁷³, con independencia de su estado de desarrollo económico.⁷⁴ Era menester examinar la manera en que el trato especial y diferenciado estaba relacionado con la progresividad, la flexibilidad, la creación de capacidad y las instituciones regionales.⁷⁵ También se expresó la opinión de que la necesidad de trato especial y diferenciado en este campo no estaba limitada al elemento de la progresividad. La labor sobre los principios esenciales debía centrarse en la promoción de las necesidades de desarrollo y los intereses de todos los países, y en especial de los países en desarrollo.⁷⁶ No obstante, se observó que si las exenciones y exclusiones formaban parte del marco general del acuerdo, habría menor necesidad de un trato especial y diferenciado, por lo menos sobre esta base.⁷⁷

37. Se sugirió también que se examinaran principios adicionales relacionados con los siguientes aspectos: i) las obligaciones de las empresas extranjeras con respecto al país de establecimiento; ii) la obligación de los gobiernos de los países de origen de asegurar que las empresas extranjeras cumplieran sus obligaciones; iii) las medidas que han de adoptar las empresas nacionales y los

⁶⁸ M/19, párrafo 53.

⁶⁹ M/19, párrafo 61.

⁷⁰ M/19, párrafo 12.

⁷¹ M/19, párrafo 50.

⁷² M/19, párrafo 32.

⁷³ M/19, párrafo 55.

⁷⁴ M/19, párrafo 15.

⁷⁵ M/19, párrafo 34.

⁷⁶ M/19, párrafo 55.

⁷⁷ M/19, párrafo 71.

gobiernos en un posible marco multilateral; iv) la necesidad de permitir que las empresas nacionales, especialmente las pequeñas, siguieran siendo competitivas y crecieran; v) los obstáculos a la competencia derivados de medidas gubernamentales, por ejemplo acciones antidumping; vi) los obstáculos a la competencia derivados de la protección de los derechos de propiedad intelectual y de los monopolios y oligopolios mundiales, y su efecto sobre las empresas locales; y vii) las grandes fusiones y adquisiciones efectuadas por empresas transnacionales, y sus efectos sobre los países en desarrollo. La labor propuesta permitiría al Grupo de Trabajo identificar medidas apropiadas de asistencia técnica y de investigación y desarrollo que pudieran ser útiles para los países en desarrollo.⁷⁸ También se observó que en los debates anteriores del Grupo de Trabajo no se habían abordado las preocupaciones de los Miembros que no han establecido una autoridad y una legislación general sobre la competencia. Se sugirió que la Secretaría debería seguir estudiando la manera en que podían aplicarse los diversos principios fundamentales en las economías que carecen de una legislación general sobre la competencia.⁷⁹

38. Se señaló que el principio del alcance integral merecía ser incluido en el marco multilateral proyectado. Los principios de transparencia, no discriminación y equidad procesal, que derivaban en gran medida de las actuales disciplinas de la OMC, proporcionaban condiciones necesarias pero no suficientes para una política de competencia adecuada. En particular, tales principios no permitían tratar de manera apropiada la cuestión de las exenciones y excepciones. Para lograr esto último, era necesario un principio adicional, el del alcance integral, que era uno de los principios utilizados en el APEC para mejorar la competencia y la reforma reglamentaria. Partiendo del reconocimiento de que todos los países necesitarían exenciones y excepciones en su política y legislación de competencia, y con arreglo al principio del alcance integral, tales exenciones y excepciones serían objeto de reexámenes periódicos en el contexto de un marco general de principios de competencia o de un compromiso general con estos principios.⁸⁰ El alcance integral no constituía un principio fundamental de la OMC, sino un principio fundamental de la política de competencia. Su inclusión en el marco propuesto contribuiría a evitar una situación en la cual el valor del acuerdo resultara socavado por una excesiva proliferación de exenciones.⁸¹

39. Abordando nuevamente el tema de las posibles consecuencias que tendría para las políticas industriales y otras políticas económicas y sociales de los distintos países la incorporación del principio de no discriminación y de otros principios fundamentales de la OMC en un acuerdo de la Organización sobre política de competencia, se expresó la opinión que gran parte del debate giraba en torno a ello. Los países en desarrollo necesitaban flexibilidad para recurrir a una variedad de instrumentos de desarrollo, entre ellos los que normalmente se consideraban comprendidos en el concepto de "política industrial". En cualquier supuesto, la resolución de los conflictos entre las políticas de competencia y las de desarrollo debía dejarse a cargo de cada Miembro, con sujeción a la consideración de transparencia. Lo que debía evitarse era un enfoque demasiado prescriptivo o una injerencia excesiva.⁸²

40. En respuesta a lo antedicho, delegaciones que apoyaban la elaboración de un marco multilateral señalaron que, por lo menos en cierta medida, la idea de que la política de competencia estaba en conflicto con los objetivos de desarrollo era errónea. Con ello no se quería desconocer en manera alguna la importancia de los objetivos de desarrollo -ciertamente, era comprensible que el

⁷⁸ M/19, párrafo 73.

⁷⁹ M/19, párrafo 27.

⁸⁰ M/19, párrafo 4.

⁸¹ M/19, párrafo 72.

⁸² M/19, párrafo 75.

desarrollo fuese la máxima prioridad de la política económica de los países en desarrollo- sino que quería indicarse que la amplia aplicación de los principios de la política de competencia en las distintas economías nacionales sería compatible con esos objetivos, o incluso favorable para su logro. La experiencia había demostrado que la competencia en los mercados conducía a una mayor eficiencia económica, contribuyendo de tal manera a un desarrollo sostenible a largo plazo y garantizando los intereses de todos los participantes en los mercados, incluidas las empresas pequeñas y medianas y los consumidores. No cabía duda de que no promovería los intereses de los países en desarrollo el hecho de que éstos se sometieran a disposiciones tales como las de los cárteles internacionales -los que sólo podían combatirse mediante la aplicación efectiva de las leyes de competencia-. Por tales razones, un enfoque basado en la exclusión absoluta de sectores enteros de la economía nacional del ámbito de los principios de competencia bien podría perjudicar el logro de los objetivos que se querían promover con tal enfoque.⁸³

41. A pesar de lo antedicho, los proponentes también afirmaron su convicción de que el marco multilateral propuesto podía y debía preservar un "espacio de política" suficiente para que los países en desarrollo aplicaran las políticas económicas y sociales que estimaban necesarias para su propio desarrollo. Era perfectamente legítimo que un gobierno juzgara que había objetivos de política más importantes que la necesidad de proteger la competencia. Entre otros posibles instrumentos, el propósito de preservar un espacio de política apropiado podría tenerse en cuenta mediante: i) una clara delimitación del alcance de los principios fundamentales propuestos con respecto a la política de competencia, con el objeto de asegurar que no desbordaran hacia campos de política conexos; ii) exenciones o excepciones apropiadas de la aplicación de la legislación nacional de competencia y/o del marco multilateral propuesto; y/o iii) el principio de trato especial y diferenciado, de que se trata más adelante.⁸⁴

42. Con respecto a la pertinencia de las excepciones y/o exenciones de la aplicación de las legislaciones nacionales de competencia y/o de un marco multilateral como instrumento para la gestión de cualquier conflicto con las políticas industriales nacionales, se expresó la opinión de que, dada la diversidad de fases y pautas de desarrollo económico existente entre los Miembros, debía conferirse flexibilidad suficiente a cualquier marco posible, a fin de permitir su aplicación práctica entre todos los Miembros de la OMC.⁸⁵ En un marco multilateral sobre competencia tenía que preverse la posibilidad de exenciones o exclusiones apropiadas en dos aspectos. En primer lugar, muchos Miembros -entre ellos países menos adelantados y otros países en desarrollo, pero también algunos países industrializados- deseaban conceder, en sus legislaciones sobre la materia, mayor flexibilidad a las empresas pequeñas y medianas que a otras empresas. El marco propuesto debía permitir ese tipo de flexibilidad. En segundo lugar, como ya se había indicado, los intereses nacionales podían salvaguardarse simplemente previendo la exclusión de sectores económicos sensibles de todas las disposiciones sustantivas de un marco multilateral, o sólo de algunos principios fundamentales.⁸⁶ La previsión de exenciones y excepciones proporcionaría mayor flexibilidad a los Miembros de la OMC para alcanzar otros objetivos nacionales tales como el desarrollo industrial y económico.⁸⁷ No obstante, las excepciones y exenciones debían estar sujetas a procedimientos de transparencia suficientes, a fin de que las empresas que comerciaban con un Miembro o invirtieran en

⁸³ M/19, párrafos 76 y 83.

⁸⁴ M/19, párrafo 77.

⁸⁵ M/19, párrafos 9, 27, 28, 29 y 49.

⁸⁶ M/19, párrafo 47.

⁸⁷ M/19, párrafo 78.

la economía de un Miembro supieran en qué situación se encontraban.⁸⁸ También se sugirió que la posibilidad de aplicar exenciones no se redujera gradualmente a lo largo del tiempo, o que estuviera sujeta a un examen periódico.⁸⁹

43. Se expresó la opinión de que la experiencia de algunos Miembros confirmaba que las políticas nacionales de competencia compatibles con el principio de no discriminación podían coexistir con políticas industriales y otras políticas económicas o sociales nacionales destinadas a atender a problemas determinados o a promover un interés determinado. Se hizo referencia, a este respecto, al caso de Australia, que mantenía un enfoque no discriminatorio de la aplicación de su legislación de competencia. Al mismo tiempo, existían otras políticas gubernamentales en Australia que coexistían con la política de competencia y habían permitido al Gobierno atender a otras prioridades y objetivos, por ejemplo, la restricción de la propiedad extranjera de medios de difusión australianos. Además, aunque el régimen de competencia de Australia era no discriminatorio, se preveían exenciones de la aplicación de la ley concedidas por instrumentos legislativos, siempre que tales exenciones respondieran a un criterio de interés público, o mediante procedimientos de "autorización" administrativa llevados a cabo por la autoridad de defensa de la competencia, que también se basaban en el criterio del interés público. Estas consideraciones permitían apreciar claramente que la adopción de una legislación nacional de competencia compatible con los principios de la OMC de no discriminación y transparencia, no privaría a los Miembros de la posibilidad de aplicar políticas industriales nacionales apropiadas, compatibles con las disciplinas de la OMC existentes.⁹⁰

44. De manera análoga, se observó que la Constitución de Sudáfrica establecía exigentes criterios con respecto a la aplicación de los principios de transparencia, no discriminación y equidad procesal. Todas las medidas administrativas, incluidas las adoptadas por las autoridades de defensa de la competencia, debían respetarlos. Por ejemplo, existía una clara separación institucional entre las funciones de investigación y de decisión, y estrictos criterios con respecto a la exposición y publicación de los motivos de cualquier decisión adoptada, incluidas las favorables a las partes en una fusión. Aunque el órgano sudafricano de adopción de decisiones en los casos relativos a la competencia, el Tribunal de Competencia, era un tribunal administrativo y estaba integrado por legos y no por jueces, tenía en realidad el carácter de un alto tribunal, y debía observar todos los principios y procedimientos normalmente seguidos por las instituciones de esa naturaleza. A pesar de ello, la Ley de Competencia de Sudáfrica contenía disposiciones destinadas a favorecer y promover los intereses de las empresas pequeñas y medianas y de aquellas cuyos propietarios fuesen personas de raza negra, es decir, en palabras de la Ley de Competencia, "extender y promover el control que ejercen las personas históricamente desfavorecidas". Estos dos objetivos no sólo se habían incorporado en los objetivos generales de la Ley, sino que se tenían en cuenta en las solicitudes de exención previstas en la legislación y constituían criterios concretos que habían de aplicarse en la evaluación de las fusiones. Tales aspectos de la legislación se habían considerado admisibles desde el punto de vista constitucional, porque la Constitución de la República de Sudáfrica establecía que, a fin de promover la igualdad, podían adoptarse medidas legislativas y de otra naturaleza para proteger a personas anteriormente desfavorecidas por la discriminación o mejorar su situación. Así pues, las garantías de no discriminación y de equidad procesal incorporadas en la Constitución y la existencia de una Ley de Competencia que respetaba esas garantías, no habían impedido que el Gobierno de

⁸⁸ M/19, párrafo 78.

⁸⁹ M/19, párrafo 78.

⁹⁰ M/19, párrafo 6.

Sudáfrica aplicara políticas industriales y sociales incluso cuando la aplicación de las mismas exigía la promoción selectiva de grupos de intereses determinados.⁹¹

45. Se sugirió que, como una manera posible de avanzar en lo relativo a esta cuestión, se podía incorporar en un acuerdo de la OMC sobre política de competencia sólo disposiciones generales con respecto a los principios fundamentales, y ofrecer interpretaciones más detalladas o enfoques posibles para la aplicación de los principios fundamentales en forma de directrices no vinculantes o de una lista de opciones. Esto favorecería una común inteligencia de esos principios, entre los Miembros, al tiempo que se tomaban en consideración los enfoques diversificados de la observancia de la legislación de competencia adoptados por los distintos Miembros.⁹² Se manifestó también la opinión de que, aunque los enfoques no vinculantes podrían ciertamente utilizarse como posible modo de avanzar, un marco puramente no vinculante no sería suficiente.⁹³

46. Se expresó asimismo la opinión de que los principios a que se refería el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha constituían la base del sistema multilateral de comercio y eran conocidos por todos los países. Su aplicación a la legislación de competencia no sería difícil si los Miembros emprendían con un espíritu positivo esa labor. Ninguna legislación de competencia se oponía a esos principios; por el contrario, la política de competencia y los principios de la OMC se proporcionaban mutuo apoyo. Además, los principios propuestos aumentarían la credibilidad de los organismos de defensa de la competencia. Las delegaciones debían por tanto adoptar una posición más positiva en este campo, comenzando con un análisis de cómo se reflejaban los principios en su propia legislación. De esta manera, podrían identificarse fácilmente enfoques y posiciones comunes.⁹⁴

II. DISPOSICIONES SOBRE LOS CÁRTELES INTRÍNSECAMENTE NOCIVOS

47. El Grupo de Trabajo debatió este tema en su reunión celebrada los días 1º y 2 de julio de 2002. Presentaron comunicaciones escritas al respecto los representantes de Australia, el Canadá, Corea, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, los Estados Unidos, México, Suiza y Tailandia (documentos W/198, 201, 200, 193, 203, 196, 194 y 205, respectivamente). Además, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí una nota de antecedentes preparada por la Secretaría (documento W/191), relativa a las disposiciones sobre cárteles intrínsecamente nocivos. Dicha nota sintetizaba las cuestiones planteadas y los comentarios formulados por los Miembros sobre el tema en anteriores reuniones del Grupo de Trabajo, basándose esencialmente en los informes anuales del Grupo de los últimos cuatro años y las comunicaciones que los Miembros habían presentado por escrito. También la UNCTAD y la OCDE facilitaron materiales escritos relacionados con el tema (posteriormente distribuidos, con el consentimiento del Grupo de Trabajo, como documentos W/197 y W/207, respectivamente). Por otra parte, los representantes de la Argentina; el Brasil; Cuba; Guatemala; Hong Kong, China; la India; Indonesia; el Japón; Malasia; Nueva Zelandia; el Pakistán; Rumania; Sudáfrica y Venezuela, así como el observador de la Federación de Rusia, hicieron declaraciones orales o formularon preguntas sobre los puntos en debate.

⁹¹ M/19, párrafo 31.

⁹² M/19, párrafo 80.

⁹³ M/19, párrafo 80.

⁹⁴ M/19, párrafo 82.

48. El debate sobre esta cuestión desarrolló una amplia gama de asuntos, entre ellos: i) el daño causado por los cárteles intrínsecamente nocivos, particularmente sus efectos en los países en desarrollo; ii) las medidas que requiere el tratamiento de los cárteles intrínsecamente nocivos, tanto nacionalmente como a nivel internacional; iii) el valor de los instrumentos internacionales actuales, incluidos los de la UNCTAD y la OCDE; iv) preguntas, preocupaciones y reservas en relación con las medidas multilaterales propuestas; y v) definiciones y otros aspectos.

49. En relación con el daño causado por los cárteles intrínsecamente nocivos, se dijo que semejantes arreglos socavaban los beneficios potenciales de la liberalización del comercio y representaban un alto costo para el bienestar y el desarrollo de los países pobres.⁹⁵ Los elementos a disposición del Grupo de Trabajo, entre ellos un reciente estudio de antecedentes del Banco Mundial, demostraban fehacientemente que los cárteles internacionales intrínsecamente nocivos tenían importantes efectos negativos para los países en desarrollo y que dichos efectos eran de una amplitud mayor de lo que se había supuesto.⁹⁶ Según este estudio, las importaciones afectadas por los cárteles examinados habían constituido aproximadamente el 6,7 por ciento de las importaciones totales de los países en desarrollo en 1997, o un total de 81.100 millones de dólares EE.UU. en mercancías y servicios. Por añadidura, el alza de precios atribuible a los cárteles se había elevado en algunos casos al 45 ó 50 por ciento, con lo cual sus repercusiones en el costo de las importaciones de los países en desarrollo eran enormes. Las estimaciones se basaban únicamente en los cárteles conocidos, mencionados en el estudio, cuya existencia habían revelado las autoridades responsables de la competencia en los Estados Unidos y en Europa; de ahí que las cifras reales podían ser mucho más altas aún.⁹⁷ Para citar un ejemplo que viene al caso, el cártel de electrodos de grafito, que había existido durante siete años por lo menos y había abarcado productos por un valor total de cerca de 2.500 millones de euros, había fijado los precios en cerca de un 50 por ciento por encima del precio de mercado competitivo, con lo cual los miembros del cártel habían obtenido ganancias ilícitas evaluadas en unos 1.200 millones de euros, sólo en la Comunidad Europea.⁹⁸ Los cárteles intrínsecamente nocivos también afectaban a los proveedores⁹⁹ y al acceso a los mercados.¹⁰⁰ En un estudio reciente de la OCDE se habían analizado más de cien casos investigados en los países miembros de la OCDE y unos 20 otros países, entre 1996 y 2000.¹⁰¹ La magnitud de las pérdidas que habían causado los cárteles incluidos en el estudio de la OCDE en lo que se refiere al bienestar de la población se calculaba en muchos miles de millones de dólares de los Estados Unidos por año. En su mayoría, los casos presentados se referían a cárteles nacionales, pero los cárteles internacionales fueron objeto de una atención pronunciada, por su magnitud y visibilidad. Es probable que los cárteles de índole puramente nacional fuesen incluso más perjudiciales que los grandes cárteles mundiales. Eran más corrientes en algunos sectores, como la construcción, materiales de construcción, compras de la

⁹⁵ M/18, párrafos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 47.

⁹⁶ Margaret Levenstein y Valerie Suslow, *Private International Cartels and Their Effect on Developing Countries* (Documento informativo para el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2001 del Banco Mundial, 9 de enero de 2001) (disponible a través de Internet en <http://www-unix.oit.umass.edu/~maggiel/WDR2001.pdf>. Aquí mencionado como "Estudio de antecedentes del Banco Mundial").

⁹⁷ M/18, párrafos 9 y 39.

⁹⁸ M/18, párrafo 5.

⁹⁹ M/18, párrafo 6.

¹⁰⁰ M/18, párrafos 10 y 43.

¹⁰¹ *Fighting Hard-Core Cartels - Harm, Effective Sanctions and Leniency Programme*, OCDE, 2002.

administración pública, alimentos a granel, aparatos y material eléctrico, así como en el sector de los servicios, particularmente el transporte local, los servicios profesionales y la salud pública.¹⁰²

50. Se manifestó que los cárteles internacionales constituían en gran medida un fenómeno propio de los países desarrollados, ya que ninguno de los cárteles internacionales conocidos que había examinado el Grupo de Trabajo tenía su sede en un país de bajos ingresos o un país menos adelantado. No obstante, de las contribuciones de varias delegaciones se desprendía claramente que los cárteles infligían serias pérdidas a los países en diversas partes del mundo.¹⁰³ Se señaló asimismo que los cárteles tendían a funcionar en los países donde las medidas de observancia de la legislación sobre competencia eran insuficientes o inexistentes. En el pasado, sólo los cárteles que afectaban a las economías desarrolladas, sobre todo en los Estados Unidos y la Comunidad Europea, se denunciaban e inculpaban sistemáticamente. Si bien la disolución de un cártel en esas jurisdicciones podía, en algunos casos, dificultar también sus actividades en las economías en desarrollo, era probable que nunca se descubriera ni inculpara a otros cárteles que operasen exclusivamente en países en desarrollo. El cártel internacional del acero fue un ejemplo de cártel cuya existencia se conocía desde hacía más de un decenio y cuyas actividades eran indudablemente nocivas para los países en desarrollo, pero que nunca se llevó a los tribunales.¹⁰⁴ También se opinó que poco se sabía sobre la verdadera magnitud de los daños causados por los cárteles. Muchos cálculos parecían consistir por el momento en estimaciones bastante aproximadas.¹⁰⁵

51. En cuanto a las medidas requeridas para tratar los cárteles intrínsecamente nocivos, se expresó que lo que hacía falta a nivel nacional era la adopción y aplicación enérgica de una legislación nacional sobre competencia bien elaborada.¹⁰⁶ En tal sentido, se informó al Grupo de Trabajo de las experiencias de algunos Miembros de la OMC, tanto países desarrollados como en desarrollo, que habían tenido éxito en la investigación y posterior enjuiciamiento de los cárteles.¹⁰⁷ Se señaló que los llamados programas de indulgencia, que solían conceder inmunidad al primer miembro de un cártel que se presentaba ante las autoridades con información sobre los demás miembros, podían constituir un poderoso instrumento de coacción.¹⁰⁸

52. También se observó que debido al carácter internacional de muchos cárteles no era posible limitarse a arreglos estrictamente locales; por el contrario, se necesitaba en este terreno una acción internacional.¹⁰⁹ Resultaba difícil, para una sola autoridad de la competencia, ocuparse eficazmente de las repercusiones de cárteles cuyas actividades se extendían a múltiples economías, sobre todo cuando el régimen de protección de la competencia se acababa de crear o cuando la autoridad encargada de la competencia a nivel local contaba con escasos recursos. En consecuencia, los países tenían que cooperar en la represión de las infracciones que se consideraban más dañinas.¹¹⁰

¹⁰² M/18, párrafo 48.

¹⁰³ M/18, párrafo 33.

¹⁰⁴ M/18, párrafo 9.

¹⁰⁵ M/18, párrafo 37.

¹⁰⁶ M/18, párrafos 5, 6, 14, 24 y 31.

¹⁰⁷ M/18, párrafos 5, 6, 14, 30 y 31.

¹⁰⁸ M/18, párrafos 27 y 29.

¹⁰⁹ M/18, párrafo 22.

¹¹⁰ M/18, párrafos 8, 9, 11, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32 y 33.

La cooperación se había iniciado bilateralmente en algunos casos y había demostrado sus ventajas.¹¹¹ Sin embargo, la negociación y aplicación de tales acuerdos requería mucho tiempo¹¹², y además los cárteles internacionales y prácticas similares con frecuencia afectaban a países no abarcados por los acuerdos bilaterales. Por otra parte, tal vez los países con regímenes de competencia más avanzados tuvieran poco interés en cooperar con países donde la observancia de la legislación sobre competencia se consideraba insuficiente.¹¹³ Finalmente, muchos países quedaban excluidos de los beneficios de tales acuerdos.¹¹⁴ Por estos motivos, se sugirió la conveniencia de considerar la inclusión de disposiciones sobre cárteles intrínsecamente nocivos en un marco multilateral sobre política de competencia.¹¹⁵

53. Respecto del posible contenido de las disposiciones de un marco multilateral sobre política de competencia relacionadas con los cárteles intrínsecamente nocivos, se indicó la necesidad de considerar dos elementos principales: i) la prohibición de estos cárteles; y ii) las medidas destinadas a promover el intercambio de información sobre los mismos entre los Miembros de la OMC. Concretamente, un eventual acuerdo de la OMC debería estipular claramente que los cárteles intrínsecamente nocivos estaban prohibidos. Dichos cárteles deberían definirse explícitamente; un mecanismo permitiría a los países establecer excepciones a esta definición por motivos de política nacional, asegurando al mismo tiempo transparencia al aplicar tales excepciones; por último, deberían darse orientaciones para prevenir las actividades de los cárteles mediante penas apropiadas. La formulación exacta de una definición de los cárteles intrínsecamente nocivos sólo podía establecerse a través de negociaciones. En cuanto a las sanciones, si bien eran inherentes al derecho interior y estaban estrechamente ligadas a los regímenes jurídicos nacionales, un Comité de Política de Competencia de la OMC podía orientar a los países que desearan establecer penas, señalando a su atención ejemplos de aplicación eficaz en las distintas jurisdicciones.¹¹⁶ Se sugirió asimismo la necesidad de prever un período de transición para la adopción de tales disciplinas por los países en desarrollo que no contaran aún con leyes sobre competencia. Durante este período de transición se suministraría asistencia técnica y ayuda para la creación de capacidad en relación con la adopción de leyes y su ulterior observancia.¹¹⁷ También se dijo que toda iniciativa internacional al respecto no debería concentrarse demasiado en las modalidades nacionales en desmedro de las internacionales. Se atribuyó importancia a la aplicación de mecanismos de cooperación específicamente orientados a la cuestión de los cárteles intrínsecamente nocivos.¹¹⁸

54. Se examinó la pertinencia de los actuales instrumentos internacionales. En cuanto al Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas, de las Naciones Unidas (el "Conjunto")¹¹⁹, su objetivo primario era lograr

¹¹¹ M/18, párrafos 8, 9 y 11.

¹¹² M/18, párrafo 8.

¹¹³ M/18, párrafo 9.

¹¹⁴ M/18, párrafo 8.

¹¹⁵ M/18, párrafos 8, 9, 10, 11, 16, 17, 29 y 32.

¹¹⁶ M/18, párrafo 17.

¹¹⁷ M/18, párrafo 19.

¹¹⁸ M/18, párrafo 22; véase el desarrollo de la parte C.III., *infra*.

¹¹⁹ Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas, Naciones Unidas (Ginebra, 1980).

que las prácticas comerciales restrictivas no obstaculizaran o impidieran la realización de las ventajas provenientes de la liberalización del comercio, particularmente las relacionadas con el comercio y el desarrollo de los países en desarrollo. Podía aplicarse universalmente, tanto a todas las empresas y países como a las transacciones que comprendieran bienes y servicios. Como se decía en el Conjunto, las empresas debían abstenerse de establecer acuerdos horizontales tales como: acuerdos de fijación de precios, incluidos los de exportación e importación; licitaciones colusorias; acuerdos de asignación de mercados o de clientes; asignación por cuotas de ventas y producción; acción colectiva para la imposición de acuerdos, por ejemplo mediante la negativa concertada a tratar; denegación concertada de suministros a importadores potenciales; y rechazo colectivo de la participación en un acuerdo o una asociación, que fuera vital para la competencia.¹²⁰ Por su parte, la Recomendación de la OCDE sobre cárteles intrínsecamente nocivos¹²¹ en esencia establecía que los países miembros de la OCDE debían procurar que su legislación sobre competencia impidiera y disuadiera efectivamente la acción de los cárteles intrínsecamente nocivos, particularmente mediante: i) sanciones eficaces, de naturaleza y severidad tales que disuadan a las empresas y las personas de participar en actividades de cárteles; y ii) facultades de coacción y organismos competentes, entre otras cosas habilitados para exigir la presentación de documentos e información. La Recomendación también encomendaba a los miembros de la OCDE que cooperaran entre sí en la aplicación de las leyes contra los cárteles, estableciendo una serie de principios que debían regir dicha cooperación. Entre otras cosas, el Comité de Competencia de la OCDE debía examinar las experiencias de los miembros en la aplicación de la Recomendación. Se invitaba a los países que no eran miembros de la OCDE a hacer suya esta Recomendación. Así pues, tanto el Conjunto como la Recomendación de la OCDE ponían de manifiesto la existencia de una gran preocupación sobre el tema a nivel internacional.¹²²

55. Varias delegaciones formularon preguntas y expresaron sus preocupaciones y reservas en relación con estas propuestas y observaciones. Se señaló que no había una definición de cárteles intrínsecamente nocivos que tuviera aceptación general. La Recomendación de la OCDE se concentraba en las prácticas de las empresas, y no en las medidas gubernamentales que afectaban al comercio, que ya abarcaban los actuales Acuerdos de la OMC¹²³, mientras el documento en cuestión reconocía que la utilidad del concepto "cártl intrínsecamente nocivo" era limitada, puesto que los países aplicaban definiciones, prohibiciones y exenciones diversas en materia de acuerdos de creación de cárteles.¹²⁴ La definición de cárteles intrínsecamente nocivos suponía excluir aquellos acuerdos que pudieran justificarse por motivos de mejoramiento de la eficiencia; en este contexto, se preguntó si era posible en la práctica hacer una distinción entre los cárteles intrínsecamente nocivos y los que no lo eran, y si existía un margen de maniobra para defender la formación de un cártel por motivos de eficiencia; y, de ser así, en qué medida. A este respecto, existían diferencias de criterio entre algunos Miembros.¹²⁵ Se observó también que la definición de cárteles intrínsecamente nocivos había sido objeto de un intenso debate al negociarse la Recomendación de la OCDE de 1998, y se aconsejó proceder también a un debate similar en el seno del Grupo de Trabajo, antes de pasar a la negociación. En particular, había que determinar si la definición de cárteles intrínsecamente nocivos se limitaría a

¹²⁰ M/18, párrafo 33.

¹²¹ *OECD Council Recommendation Concerning Effective Action Against Hardcore Cartels* (Recomendación del Consejo de la OCDE adoptada por la 921ª reunión el 25 de marzo de 1998 [C/M(98)7/PROV]).

¹²² M/18, párrafos 18, 19, 20, 21, 22, 25, 32, 34 y 46.

¹²³ M/18, párrafos 33 y 39.

¹²⁴ M/18, párrafo 33.

¹²⁵ M/18, párrafo 37.

las restricciones en materia de fijación de precios, licitaciones colusorias, distribución del mercado y producción, como era el caso de la Recomendación de la OCDE, o si ésta sólo debía utilizarse como "punto de partida", de modo que el Grupo consideraría la posibilidad de completar la definición de la OCDE con otros elementos o prácticas. Otro aspecto que debía abordarse estaba relacionado con las exenciones respecto de la prohibición de formar cárteles. Prácticamente todos los países otorgaban tales exenciones, ya sea en el marco de reglamentos relativos a industrias específicas, o por haber optado por no aplicar la ley sobre competencia a determinados comportamientos o sectores.¹²⁶

56. Se planteó la cuestión de saber si la definición de cárteles intrínsecamente nocivos incluiría un criterio *per se* o un criterio de razonabilidad. Se mencionó que, en su legislación nacional, un Miembro había adoptado un criterio *per se* al tratar la fijación de precios y la licitación colusoria, pero el tratamiento de actividades de limitación cuantitativa y distribución del mercado se basaba en un criterio de razonabilidad. De preferirse este último criterio, habría que abordar la cuestión del alcance de la discrecionalidad para iniciar una acción penal. Un criterio de razonabilidad podía justificar determinadas actividades por motivos de eficiencia cuando la legislación interior se basaba en el tamaño del mercado interior, mientras que en el contexto internacional las restricciones de la producción y distribución del mercado difícilmente se justificarían.¹²⁷ Otro Estado Miembro había utilizado por más de 15 años el criterio de razonabilidad para determinar la admisibilidad de las actividades de los cárteles. Si bien la eficiencia era el criterio básico de la razonabilidad, se trataba de un concepto flexible, que dependía de las circunstancias de cada caso. Por tal motivo, habían surgido diversas controversias en relación con la aplicación de la razonabilidad y la eficiencia. En consecuencia, las disposiciones de la legislación basadas en dicha regla se habían derogado, sustituyéndose por un criterio de "ilegal *per se*".¹²⁸

57. Una cuestión conexas se refería a los cárteles de exportación y la manera de tratar los cárteles que, aunque no exentos formalmente, no estuvieran comprendidos en la legislación anticártel de un país o fuesen tolerados por un gobierno.¹²⁹ En particular, se preguntó si podía justificarse la existencia de un cártel de exportación por motivos de eficiencia.¹³⁰ Para responder, se señaló que, pese a su denominación peyorativa, entre los cárteles de exportación figuraban toda clase de convenios, cuyo efecto sobre la competencia no podía determinarse de manera tajante. Por ejemplo, el origen de los cárteles de exportación en los Estados Unidos había sido simplemente ofrecer a las empresas que de otra forma no hubieran podido hacerlo la posibilidad de dedicarse a la exportación. En estos casos, los convenios aludidos implicaban un efecto claramente favorable a la competencia. Por lo tanto, era necesario proceder con cautela al abordar los acuerdos que normalmente se caracterizaban como cárteles de exportación, pero que, de hecho, no tenían necesariamente los mismos efectos que los cárteles intrínsecamente nocivos.¹³¹

58. Se manifestó que, probablemente, los acuerdos intergubernamentales o interestatales no estarían abarcados por un acuerdo de la OMC sobre política de competencia, cuyo objetivo serían las prácticas anticompetitivas de las empresas. En apoyo a esta idea se hizo notar que, en el Conjunto adoptado por las Naciones Unidas, había una cláusula específica (el párrafo 9 de la sección B), que

¹²⁶ M/18, párrafo 18.

¹²⁷ M/18, párrafo 22.

¹²⁸ M/18, párrafo 23.

¹²⁹ M/18, párrafo 18.

¹³⁰ M/18, párrafos 34 y 37.

¹³¹ M/18, párrafo 44.

establecía claramente la no aplicación del Conjunto a los acuerdos intergubernamentales y a las prácticas comerciales restrictivas a que dichos acuerdos dieran lugar directamente.¹³²

59. Se expresó la opinión de que las disposiciones sobre cárteles intrínsecamente nocivos no debían entrañar una armonización indebida de la legislación e instituciones de la competencia, ni imponer cargas innecesarias al limitar las opciones de los países en cuanto a la política industrial correspondiente a su etapa de desarrollo. Debían considerarse posibles exenciones en favor de cárteles de empresas pequeñas y medianas y cárteles de exportación e importación, así como cárteles especializados en determinados sectores de la economía. Por otro lado, las exenciones, entendidas como instrumentos específicos de flexibilidad, debían definirse claramente desde el punto de vista de su cobertura sectorial, ofrecer transparencia¹³³ y ser de carácter temporal, con el objetivo de su ulterior eliminación paulatina. Por otra parte, las exenciones o exclusiones de sectores no siempre representaban un método eficaz y eficiente para que los países fortalecieran la competitividad de sus industrias nacionales. Se alegó, por ejemplo, que, en un país Miembro, los sectores industriales con gran capacidad competitiva en el plano internacional, como la producción de automóviles y de semiconductores, habían adquirido esa capacidad por haber estado expuestas a una intensa competencia en el mercado nacional, y no por habérseles concedido amplias excepciones en el marco de la ley sobre competencia.¹³⁴

60. Se plantearon dudas sobre si la OMC era el lugar apropiado para una acción internacional sobre los cárteles intrínsecamente nocivos. Una serie de acuerdos bilaterales y regionales ya abordaban algunos problemas de los cárteles internacionales intrínsecamente nocivos. Además, el *International Competition Network* era un foro en rápida evolución, en el cual las autoridades nacionales de la competencia podían abordar problemas de su especialidad y que, según varias opiniones, era muy prometedor desde el punto de vista de la cooperación y el fomento de las mejores prácticas. La idea de imponer en el marco de la OMC la obligación de que todos los Miembros adoptaran leyes de prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos no era conveniente, puesto que todavía una cincuentena de Miembros por lo menos ni siquiera tenía leyes sobre competencia. Incluso en el caso de los países en desarrollo que las tenían, era poco seguro que estuviesen a la altura de las normas establecidas en la Recomendación de la OCDE en relación con sanciones efectivas y procedimientos y organismos de observancia. Lo que los países en desarrollo Miembros necesitaban era asistencia técnica y estímulo, no que se les impusiera una pesada obligación con el respaldo del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. De no aplicarse el mecanismo de solución de diferencias a un marco multilateral sobre política de competencia, lo que quedara sólo tendría el valor de compromisos de máximo empeño, cooperación técnica y tal vez un mecanismo de examen por homólogos. En tal caso, podría ser preferible que dicho marco se elaborase en un foro especializado, tal como el *International Competition Network*, y no en la OMC.¹³⁵ También se señaló que se trataba de un órgano recién creado y, al menos por el momento, se ocupaba de otros asuntos que los cárteles.¹³⁶

¹³² M/18, párrafo 46.

¹³³ M/18, párrafos 21 y 32.

¹³⁴ M/18, párrafo 32.

¹³⁵ M/18, párrafo 36.

¹³⁶ M/18, párrafo 41.

61. También se dijo que, para muchos países en desarrollo Miembros, la adopción de una legislación sobre competencia y el establecimiento de las instituciones conexas encargadas de su observancia representaba un proceso gravoso. Debía efectuarse una evaluación de los costos y beneficios vinculados a la elaboración de una legislación sobre competencia y sus procedimientos de observancia.¹³⁷ Pese a la invitación explícita formulada por la Recomendación de la OCDE a los países que no eran miembros de la OCDE a hacerla suya, pocos habían aprovechado esta oportunidad. Sería útil averiguar por qué. Si la cuestión era de orden institucional, sería interesante preguntar si la OMC presentaría cierta ventaja institucional frente a la OCDE y otros organismos para tratar los problemas de los cárteles intrínsecamente nocivos.¹³⁸ En relación con el alcance de las normas sustantivas, se puso en duda que una prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos en el plano nacional tuviera probabilidades de éxito si no venía acompañada de la correspondiente prohibición de fusiones con vistas a crear un monopolio.¹³⁹ Se expresó asimismo la opinión de que, si la Conferencia Ministerial de Doha se había referido expresamente a los cárteles intrínsecamente nocivos se debía a que, además de reconocer sus efectos perniciosos, existía un consenso entre los funcionarios de los organismos encargados de velar por la competencia acerca de la necesidad de fiscalizar y prohibir semejantes actividades. Apenas el examen de la cuestión se extendía más allá de los cárteles intrínsecamente nocivos para abarcar aspectos tales como las fusiones, las restricciones verticales o incluso la posición dominante, ya no había consenso siquiera entre las autoridades de la competencia y no estaba claro que la OMC fuese un lugar apropiado para dar orientaciones sobre estas materias.¹⁴⁰

62. También se opinó que era necesario abordar ciertas cuestiones para tener la certeza de que un marco multilateral sobre política de competencia redundara en beneficio de los países en desarrollo. En primer lugar ¿qué influencia tendría cualquier definición posible -especialmente si era de carácter restrictivo- sobre la reglamentación nacional de una ley sobre competencia con la que se pretendiera abordar cuestiones de política general? También era importante la flexibilidad. Otro aspecto que merecía consideración era el criterio adoptado por los tribunales de algunos países en los procesos contra las actividades de los cárteles. ¿Qué uso tendría una definición de cártel en un marco multilateral, si los tribunales tendían a aplicar un criterio basado en la razonabilidad para analizar la conducta de los cárteles o conductas similares?¹⁴¹

63. En relación con los elementos adicionales aplicables a los cárteles intrínsecamente nocivos, se dijo que el Grupo debería debatir las posibles características complementarias de todo compromiso que los países Miembros pudieran contraer en relación con los cárteles intrínsecamente nocivos, aparte del de adoptar una ley. En particular, ¿se incluirían sanciones en las disposiciones de la OMC sobre cárteles intrínsecamente nocivos? y, en caso afirmativo, ¿cuál sería el contenido de las disposiciones a ese respecto? ¿Qué pasaría si un Miembro promulgase una ley pero no asegurase su cumplimiento? ¿Cómo podía concebirse un acuerdo a fin de ofrecer a las autoridades encargadas de su cumplimiento la libertad necesaria para no recurrir a la vía judicial cuando se careciera de pruebas en apoyo o cuando ello fuese contrario a los intereses de la justicia? La experiencia de la OCDE en la negociación de la Recomendación sobre los cárteles intrínsecamente nocivos era una lección inapreciable para la labor del Grupo de Trabajo en relación con estas cuestiones. Dada la naturaleza

¹³⁷ M/18, párrafo 37.

¹³⁸ M/18, párrafo 44.

¹³⁹ M/18, párrafo 41.

¹⁴⁰ M/18, párrafo 44.

¹⁴¹ M/18, párrafo 38.

de la OMC, llegar a un consenso en cuanto al trato de los cárteles podría ser aun más difícil que en la OCDE.¹⁴²

64. Se respondió reconociendo la necesidad de seguir examinando cuestiones tales como las definiciones, las exenciones y otros aspectos de las disposiciones sobre cárteles intrínsecamente nocivos en un marco multilateral sobre política de competencia.¹⁴³ También se señaló que el problema de los cárteles intrínsecamente nocivos era un fenómeno mundial y no algo exclusivo de los países desarrollados. En general se reconocía que los acuerdos de este tipo constituían la forma más dañina de práctica anticompetitiva. Además de sus repercusiones directas y negativas en el bienestar del consumidor y las industrias usuarias, podían obstaculizar el acceso a los mercados. Por ejemplo, la repartición de mercados nacionales entre los integrantes de un cártel impedía que los Miembros aprovecharan las oportunidades para entrar en un mercado que se les ofrecían gracias a la labor realizada por la OMC y anteriormente por el GATT. De ahí la importancia de la cuestión de los cárteles para la OMC.¹⁴⁴

III. MODALIDADES DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA

65. El Grupo de Trabajo examinó también este tema en su reunión celebrada los días 1º y 2 de julio de 2002. Presentaron contribuciones por escrito al respecto los representantes de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, el Japón, Australia, Corea, el Canadá, los Estados Unidos y Tailandia (documentos W/193, 195, 199, 200, 202, 204 y 205, respectivamente). Además, como lo solicitara el Grupo de Trabajo en su reunión informal del 26 de febrero, la Secretaría presentó una nota de antecedentes sobre modalidades de cooperación voluntaria (documento W/192). En ella se resumían las cuestiones planteadas y los comentarios formulados por los Miembros sobre el tema en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, principalmente sobre la base de los informes anuales elaborados en los últimos cuatro años y las comunicaciones escritas de los Miembros. La UNCTAD y la OCDE presentaron también sendos materiales escritos sobre el tema (posteriormente distribuidos como documentos W/197 y W/208, respectivamente). Los representantes de Colombia; Cuba; Egipto; Hong Kong, China; la India; Indonesia; Malasia; Noruega; Singapur; Sudáfrica; Suiza; Tanzania y Zambia hicieron declaraciones oralmente o formularon preguntas en relación con este tema.

66. El debate sobre este punto abarcó una amplia gama de cuestiones, entre ellas: i) la necesidad de cooperación internacional para hacer frente a las prácticas anticompetitivas de las empresas en un entorno económico en mundialización; ii) las posibles modalidades de la cooperación voluntaria que podrían incluirse en un marco multilateral sobre política de competencia; iii) preguntas, preocupaciones y reservas acerca de las modalidades propuestas; iv) otros enfoques, más vinculantes, de la cooperación; v) aspectos prácticos de la cooperación en materia de legislación y política de competencia basados en las modalidades propuestas; vi) relación con otros elementos del párrafo 25 de la Declaración de Doha y cuestiones institucionales más generales.

67. En lo que atañe a la necesidad de la cooperación, se señaló que, con la mundialización de las actividades económicas, se hacía más frecuente que las prácticas comerciales anticompetitivas tuvieran lugar en más de un país a la vez o incluso mundialmente en algunos casos. En tales circunstancias, resultaba difícil para un solo gobierno evaluar correctamente los efectos de dichas

¹⁴² M/18, párrafo 18.

¹⁴³ M/18, párrafo 42.

¹⁴⁴ M/18, párrafo 43.

prácticas y prevenirlas o remediarlas.¹⁴⁵ Un acceso suficiente y oportuno a la información, que se encuentra generalmente en el exterior, facilitaría una labor más eficiente de los países en la detección e investigación de las prácticas anticompetitivas transfronterizas y en el análisis del mercado.¹⁴⁶ Además, la cooperación permitiría a los países con menos experiencia en el campo de la observancia enterarse de cómo otros países enfrentaban determinadas situaciones.¹⁴⁷ Por último, aunque no por ello menos importante, las divergencias entre las normas nacionales sobre competencia creaban potenciales distorsiones en el ámbito del comercio y la inversión y aumentaban los costos y la incertidumbre de gobiernos y empresas.¹⁴⁸ En estas condiciones, la cooperación podría simplificar, por ejemplo, los procedimientos de examen de las fusiones y disminuir los costos de estas transacciones.¹⁴⁹

68. En relación con las posibles modalidades de cooperación voluntaria que podrían incorporarse a un marco multilateral sobre política de competencia, un criterio que se propuso fue que podrían preverse dos tipos principales de cooperación en el marco de la OMC: en primer lugar el intercambio general de experiencia, de opiniones, etc. entre las autoridades de la competencia y sus funcionarios, y, en segundo lugar, las formas más concretas de cooperación entre estas autoridades en relación con casos particulares. Un Comité de Política de Competencia de la OMC desempeñaría una función clave en la primera categoría de actividades de cooperación. Las actividades de esta índole comprenderían el intercambio de información sobre leyes y prácticas nacionales de competencia, y la evolución al respecto. Otra actividad que podría ser útil sería el intercambio de experiencias y los debates en torno a determinados aspectos de la política de competencia que repercutían en el comercio internacional. Una tercera actividad que podría emprenderse en un Comité de Política de Competencia de la OMC sería el examen por homólogos de la legislación y la política de competencia de los Miembros de la OMC e incluso quizás el de su observancia. En cuarto lugar vendría el análisis y el debate conjuntos de los problemas mundiales de competencia que influían en la economía y el comercio internacional. En cuanto a la segunda categoría de actividades de cooperación, es decir, los casos específicos, se preveían dos tipos distintos de actividades. En primer lugar, el intercambio de información y pruebas en relación con casos particulares y, en segundo lugar, las consultas y el intercambio de opiniones sobre casos que afectaban a intereses comerciales importantes de otros Miembros de la OMC. Las modalidades propuestas de cooperación en relación con casos específicos no debían limitarse simplemente a la investigación de los cárteles intrínsecamente nocivos, sino que se podrían invocar en casos que se refiriesen, por ejemplo, al abuso de posición dominante, a las restricciones verticales y a otras prácticas anticompetitivas. En todo caso, las modalidades propuestas serían voluntarias o de carácter no vinculante, ya que no se exigiría la cooperación de los países, si por cualquier motivo no estuvieran preparados para ello o no lo desearan.¹⁵⁰

69. Se hizo notar que los instrumentos de cooperación voluntaria que se incorporarían a un marco multilateral con arreglo a esta propuesta eran de orden práctico y se basaban en la experiencia de la cooperación bilateral. Un primer instrumento esencial era la notificación, por la cual un país informaría a otro de ciertos casos que afectaban a los intereses importantes de este último. Luego estaba el intercambio de información distinto de las notificaciones, con el objeto de facilitar las

¹⁴⁵ M/18, párrafos 50, 53, 54, 56, 57, 70, 74 y 81.

¹⁴⁶ M/18, párrafos 57, 60, 61 y 70.

¹⁴⁷ M/18, párrafos 67, 72 y 76.

¹⁴⁸ M/18, párrafo 57.

¹⁴⁹ M/18, párrafo 57.

¹⁵⁰ M/18, párrafo 51.

actividades de observancia en cada una de las partes. Un tercer instrumento estaba vinculado al suministro recíproco de asistencia en el proceso de observancia. Por último, el acuerdo propuesto dispondría: i) el principio de cortesía tradicional o negativa, es decir que un país tendría en cuenta los intereses importantes de otros países afectados al adoptar una decisión respecto de un caso; y ii) la cortesía positiva, según la cual un país aplicaría medidas coactivas toda vez que lo solicite otro país afectado por prácticas anticompetitivas originadas en el territorio del primero. Todos estos instrumentos existían ya en los acuerdos bilaterales en los que algunos Miembros eran partes; lamentablemente, sin embargo, en su mayoría los países en desarrollo estaban excluidos de las ventajas que estos acuerdos aportaban.¹⁵¹ También se expresó la opinión de que un acuerdo multilateral sobre política de competencia proporcionaría un marco flexible de cooperación en el seno de la OMC, que podría ampliarse con el tiempo para incluir varias otras actividades, por ejemplo relacionadas con la creación de capacidad institucional, el intercambio de información entre las autoridades de la competencia y la administración del acuerdo. Dado el nivel de desarrollo de las instituciones encargadas de la competencia en muchos países Miembros de la OMC, probablemente ese intercambio de información tendría principalmente fines educativos, por lo menos en un principio. Entre las informaciones del caso figurarían las leyes, los informes de las autoridades de la competencia, las directrices y otras políticas de observancia, discursos, presentaciones y los acuerdos bilaterales de cooperación que se hubieran concertado. Todo esto sería de utilidad para los Miembros participantes y contribuiría al proceso de creación de capacidades.¹⁵² Se sugirieron también diversos criterios conexos.¹⁵³

70. Un punto de vista diferente se expresó en el sentido de que el compromiso inicial sobre cooperación en un marco multilateral sobre política de competencia debía ser vinculante. Según este criterio, un marco puramente voluntario sería ineficaz, pues las autoridades más avanzadas en materia de competencia que disponían de más información y capacidades, tendrían pocos incentivos para proporcionar información o asistencia a autoridades menos avanzadas que no estaban en condiciones de corresponder. El objetivo inicial de este marco sería exclusivamente la lucha contra los cárteles internacionales y comprendería los siguientes elementos: en primer lugar, las autoridades que procedieran a investigar e inculpar a un cártel internacional tendrían la obligación de notificarlo a fin de informar rápidamente a las autoridades competentes de otros países en que el cártel en cuestión pudiese estar operando. Esta notificación debería incluir como mínimo los antecedentes y un análisis preliminar del caso. La marcha de la investigación se debería comunicar regularmente a las autoridades. El segundo elemento consistiría en consultas obligatorias. De acuerdo con este requisito los gobiernos que investigaran un presunto cártel deberían entablar conversaciones con los países Miembros cuyos intereses pudieran verse afectados. El tercer elemento sería la asistencia en el proceso de observancia, para lo cual las autoridades de la competencia tendrían la obligación de proporcionar asistencia para analizar el caso, intercambiar su experiencia y ofrecer sugerencias con respecto a los métodos de observancia. También deberán atender las peticiones de información. Dadas las abrumadoras diferencias de recursos financieros y técnicos entre las autoridades de la competencia de los países desarrollados y los países en desarrollo sería necesario dar un trato especial y diferenciado a los países Miembros en desarrollo. Una posibilidad era que las autoridades de los países en desarrollo encargadas de la competencia recibieran una compensación financiera por prestar los servicios que se les solicitaran y colaboraran en la medida de lo posible dentro de ciertas limitaciones técnicas y financieras.¹⁵⁴

¹⁵¹ M/18, párrafo 52.

¹⁵² M/18, párrafo 53.

¹⁵³ M/18, párrafos 51, 52, 54, 55, 61, 63, 67, 68, 69, 72 y 74.

¹⁵⁴ M/18, párrafo 54.

71. En cuanto a las preguntas, preocupaciones y reservas que inspiraban las modalidades propuestas de cooperación, se sugirió que era importante, en primer lugar, definir claramente los mecanismos que comprendería el posible marco multilateral. El Grupo de Trabajo también necesitaba aclarar el significado del término "voluntario". En anteriores debates del Grupo se había observado que la cooperación, según la concebía la mayoría de los países que participaban en ella, era una actividad inherentemente voluntaria; por consiguiente, sería inútil tratar de imponerla. Ahora bien el Grupo de Trabajo debía determinar si existía alguna obligación por parte del país al que se dirigía la solicitud de prestar colaboración, de, por ejemplo, "considerarla favorablemente", o si, de no estar por alguna razón en condiciones de colaborar, tendría que especificar los motivos que se lo impedían, o si en ese contexto podría presentarse la obligación de celebrar consultas, etc. A este respecto se planteaba una cuestión importante: la de la discreción con que podía obrar el destinatario de una solicitud, en la esfera, por ejemplo, de las notificaciones, si estuviera procediendo a una investigación de una actividad delicada como la de los cárteles, y no considerase oportuno hacer notificaciones completas por miedo a comprometer la investigación. Otro problema más era el de los límites de cualquier obligación en materia de cooperación, es decir si se limitaría únicamente a la conducta comprendida en las disciplinas sustantivas que el Grupo de Trabajo aprobara o iría más allá. Por ejemplo, si se adoptara una disciplina sustantiva únicamente con respecto a los cárteles intrínsecamente nocivos, ¿se extendería la cooperación únicamente a éstos o también a otros aspectos de la aplicación de las leyes sobre competencia?¹⁵⁵

72. Se expresó preocupación por el hecho de que los países en desarrollo no se sentían suficientemente beneficiados por el sistema multilateral de comercio¹⁵⁶; sin la garantía de obtener ventajas concretas de la cooperación, tendrían menos interés en promover leyes y políticas de competencia a nivel multilateral.¹⁵⁷ Se adujo en particular que los acuerdos de cooperación vigentes no bastaban para proteger a los países en desarrollo frente a los cárteles internacionales, ya que los países con regímenes más avanzados en materia de competencia tenían pocos incentivos para cooperar con los países donde la observancia de la legislación sobre competencia se consideraba insuficiente.¹⁵⁸ En consecuencia, los esfuerzos de promoción de la cooperación en el marco de la OMC deberían basarse en ejemplos prácticos, demostrativos de las ventajas que la cooperación puede ofrecer a los países participantes.¹⁵⁹ También se manifestó que la cooperación era un catalizador que había logrado estimular relaciones más estrechas y un espíritu cooperativo entre los funcionarios de los organismos participantes¹⁶⁰ y sentaba las bases para una cooperación aún mayor. Por consiguiente, cuando los países en desarrollo o los países menos rigurosos en el cumplimiento de la ley, tuvieran un acceso más sistemático a la información, por ejemplo sobre las operaciones de cárteles internacionales, empezarían a darse cuenta de la clase de ventajas que podían obtenerse mediante otras formas de cooperación en el plano multilateral.¹⁶¹ Otro motivo de preocupación era que, para muchos países pequeños con empresas pequeñas, era importante concertar alianzas estratégicas en materia de importación para lograr economías de escala; pero estas prácticas podían

¹⁵⁵ M/18, párrafo 55.

¹⁵⁶ M/18, párrafo 60.

¹⁵⁷ M/18, párrafo 70.

¹⁵⁸ M/18, párrafo 76.

¹⁵⁹ M/18, párrafo 72.

¹⁶⁰ M/18, párrafo 55.

¹⁶¹ M/18, párrafo 70.

considerarse nocivas o equivalentes a cárteles de importación.¹⁶² También se dijo que la cooperación basada en casos concretos podría abordarse mejor a nivel bilateral y regional que multilateral; los acuerdos multilaterales, en todo caso, deberían limitarse a formas más generales de cooperación.¹⁶³

73. En cuanto a la propuesta de establecer compromisos vinculantes sobre cooperación en el marco de la OMC, se expresó la opinión de que hacer obligatoria una "cooperación voluntaria" equivaldría a crear una "obligación voluntaria", lo que no tenía sentido.¹⁶⁴ La introducción de una obligación vinculante crearía problemas de financiación, tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados.¹⁶⁵ Se dijo, por otra parte, que la obligatoriedad de la cooperación induciría a todos los países a contar con una autoridad encargada de la competencia; sin embargo, dado el grado diferente de desarrollo, era importante que cada país determinara si se justificaba y, de ser así, en qué etapa establecer una política de competencia o una autoridad en la materia.¹⁶⁶ El mejor estímulo para la cooperación no era un texto de fuerza jurídica vinculante, sino el interés común de los organismos de observancia en asistirse mutuamente toda vez que ello fuera razonablemente posible.¹⁶⁷ La cooperación era un proceso en dos sentidos: si una de las dos autoridades no tenía nada que aportar, sería difícil prever la forma en que la obligación de colaborar se cumpliría en la práctica; y si ambas autoridades tenían algo que aportar, sería difícil prever la forma en que esta obligación haría más productiva la tarea.¹⁶⁸ Se señaló también que era importante permitir a las autoridades de la competencia denegar solicitudes de cooperación, en caso, por ejemplo, de que un organismo considerara inoportuno proceder a una notificación exhaustiva para no comprometer una investigación anticártel en curso.¹⁶⁹

74. Al responder a estas cuestiones, se dijo que un marco de tipo voluntario podía funcionar en países con niveles comparables de desarrollo, pero que no podía esperarse el mismo resultado en un entorno multilateral que abarcaba desde los países más desarrollados hasta los menos adelantados, de modo que los beneficios esperados no serían iguales para todos.¹⁷⁰ Las cláusulas de máximo empeño parecían de escasa utilidad para los países en desarrollo¹⁷¹, en particular porque la posibilidad otorgada a la parte solicitada de denegar una solicitud no permitía garantizar una respuesta¹⁷², de modo que las modalidades de cooperación voluntaria no serían suficientes para proteger a los países en desarrollo frente a los cárteles internacionales.¹⁷³ Además, mientras los países en desarrollo no

¹⁶² M/18, párrafo 62.

¹⁶³ M/18, párrafo 50.

¹⁶⁴ M/18, párrafo 68.

¹⁶⁵ M/18, párrafos 66, 67, 71 y 72.

¹⁶⁶ M/18, párrafo 62.

¹⁶⁷ M/18, párrafo 74.

¹⁶⁸ M/18, párrafo 67.

¹⁶⁹ M/18, párrafo 55.

¹⁷⁰ M/18, párrafos 70 y 54.

¹⁷¹ M/18, párrafo 63.

¹⁷² M/18, párrafo 70.

¹⁷³ M/18, párrafo 76.

podían obligar a los países desarrollados a entregar información en los acuerdos de cooperación voluntaria, dada la asimetría de poderes existente entre unos y otros, la cooperación voluntaria por parte de las autoridades de la competencia de los países en desarrollo se haría obligatoria en la práctica.¹⁷⁴ También se manifestó que no había motivos para que la OMC reprodujera los mecanismos voluntarios existentes en el marco de regímenes de cooperación bilateral y regional.¹⁷⁵

75. Prosiguiendo la reflexión sobre la opción entre cooperación vinculante y no vinculante, se mencionaron algunas experiencias concretas de cooperación de los Miembros, tanto países desarrollados como países en desarrollo. Se dijo que los acuerdos formales de cooperación daban lugar a relaciones más estrechas y un mayor espíritu de cooperación¹⁷⁶; sin embargo, en gran medida la cooperación seguía siendo un terreno informal. La cooperación informal, por ejemplo consultas sobre las investigaciones, intercambio de información no confidencial y divulgación de la información pertinente, había demostrado su valor y eficacia en muchos casos.¹⁷⁷ Generalmente bastaba una llamada telefónica, el intercambio de mensajes por correo electrónico o el encuentro con colegas en diversos foros.¹⁷⁸ Se sugirió que no estaba claro si el eventual carácter vinculante de estas actividades agregaría alguna ventaja real.¹⁷⁹ Como ejemplo de evolución gradual de lo informal a métodos más oficiales de la cooperación, se mencionó el desarrollo de cooperación entre los países nórdicos.¹⁸⁰

76. Al tratar los tipos de información que se pondría a disposición en el marco de la cooperación sobre casos concretos, se manifestó que la divulgación de toda información de carácter confidencial no tendría que ser obligatoria, pero que los Miembros podrían intercambiar este tipo de información si ello se ajustaba a su legislación y prácticas de observancia.¹⁸¹ En particular, los países que desearan cooperar tendrían que satisfacer un mínimo de condiciones relativas a la calidad de sus procedimientos y tratamiento de la información confidencial.¹⁸² Ahora bien, considerando el tiempo que se requería para establecer un marco apropiado de protección de la información confidencial, se opinó que el intercambio de información confidencial sólo sería posible a largo plazo¹⁸³, y que, al principio, el intercambio de información no confidencial constituía un objetivo más asequible y que igualmente traería resultados útiles.¹⁸⁴ Se añadió que el intercambio de información confidencial debería excluirse de un acuerdo multilateral¹⁸⁵, ya que los acuerdos bilaterales eran más apropiados

¹⁷⁴ M/18, párrafo 63.

¹⁷⁵ M/18, párrafo 70.

¹⁷⁶ M/18, párrafo 55.

¹⁷⁷ M/18, párrafo 57.

¹⁷⁸ M/18, párrafo 72.

¹⁷⁹ M/18, párrafo 72.

¹⁸⁰ M/18, párrafo 58.

¹⁸¹ M/18, párrafos 52, 53 y 70.

¹⁸² M/18, párrafo 54.

¹⁸³ M/18, párrafos 57 y 54.

¹⁸⁴ M/18, párrafos 57 y 70.

¹⁸⁵ M/18, párrafos 67, 70 y 81.

para tal fin.¹⁸⁶ Se mencionaron ciertas preocupaciones sobre la posible divulgación de información confidencial¹⁸⁷, lo que entre otras cosas atentaría contra la eficacia de las investigaciones anticártel.¹⁸⁸ Al mismo tiempo, se manifestó que era importante evitar un concepto demasiado amplio de la confidencialidad, que hiciera imposible dar a conocer cualquier elemento del expediente de una investigación. Si bien los secretos comerciales no podrían divulgarse sin el consentimiento expreso de las partes, la información consistente sobre todo en datos recabados por las autoridades en el curso de su trabajo podría intercambiarse en los casos oportunos. Es más, en tal eventualidad el fuerte interés común de las autoridades debería permitirles coordinar sus investigaciones, a los efectos de aumentar al máximo las posibilidades de éxito.¹⁸⁹ Otra opinión fue que los Miembros debían explorar la posibilidad de intercambiar informaciones confidenciales, puesto que sólo así se asegurarían beneficios concretos para los países en desarrollo.¹⁹⁰ En cuanto al alcance de las disposiciones propuestas sobre cárteles intrínsecamente nocivos, se dijo que las normas nacionales sobre prácticas colusorias deberían ajustarse a las necesidades particulares de desarrollo de cada país, pero que los cárteles internacionales no estaban sujetos a ninguna dimensión de desarrollo, por lo que no cabía establecer exenciones, exclusiones o protecciones basadas en el interés del desarrollo.¹⁹¹

77. En relación con la propuesta de crear un Comité de Política de Competencia de la OMC, se señaló que el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Política de Competencia creado en virtud del capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, podía ilustrar el funcionamiento posible de un tal Comité en el marco de la OMC.¹⁹² El órgano en cuestión podía facilitar el intercambio general de opiniones y experiencias¹⁹³; apoyar el intercambio de información sobre la legislación nacional en materia de competencia, la práctica interna y la evolución¹⁹⁴; brindar una oportunidad para el intercambio de experiencias y realizar debates sobre cuestiones específicas de la política de competencia que afectaran al comercio internacional¹⁹⁵; servir de foro para exámenes voluntarios por homólogos de la legislación y políticas de competencia de los Miembros¹⁹⁶, y tal vez también su observancia¹⁹⁷; coordinar y seguir la asistencia técnica¹⁹⁸; y elaborar una visión a largo plazo de mejoramiento de la cooperación¹⁹⁹, en particular mediante el debate de cuestiones relativas a

¹⁸⁶ M/18, párrafo 67.

¹⁸⁷ M/18, párrafo 69.

¹⁸⁸ M/18, párrafo 54.

¹⁸⁹ M/18, párrafo 74.

¹⁹⁰ M/18, párrafos 54 y 70.

¹⁹¹ M/18, párrafos 79 y 80.

¹⁹² M/18, párrafo 53.

¹⁹³ M/18, párrafos 51 y 67.

¹⁹⁴ M/18, párrafo 52.

¹⁹⁵ M/18, párrafos 51 y 53.

¹⁹⁶ M/18, párrafo 53.

¹⁹⁷ M/18, párrafo 51.

¹⁹⁸ M/18, párrafo 53.

¹⁹⁹ M/18, párrafo 53.

la convergencia de procedimientos y contenidos.²⁰⁰ También se manifestó que, si bien la creación de un tal Comité de la OMC merecía debatirse, debía tenerse presente que ya existían otros mecanismos multilaterales.²⁰¹

78. En relación con las condiciones para la cooperación en la OMC, se afirmó que una estructura nacional encargada de velar por la observancia era indispensable para que la cooperación se justificara.²⁰² Un Miembro que no contara con ningún mecanismo de observancia a nivel nacional no podría participar en una cooperación sobre casos concretos, ya que no tendría ni ley sobre competencia, ni casos que presentar ni la capacidad de cooperar.²⁰³ Tampoco era realista suponer que un país entablaría juicio a una empresa por prácticas que afectaban a otro país sin disponer de una ley sobre competencia y una autoridad competente.²⁰⁴ Se expresó asimismo que la cooperación era posible incluso si los países participantes tenían sistemas diferentes en materia de legislación sobre competencia e incluso si un país no contaba con una legislación general sobre competencia o no había incorporado a su legislación nacional todos los principios establecidos por la OMC.²⁰⁵ En todo caso, no era razonable ni justo forzar la introducción de leyes y políticas nacionales sobre competencia.²⁰⁶ La cooperación debía ser voluntaria y suficientemente flexible como para que cada país pudiera evaluar si se justificaban el establecimiento de una política de competencia o la creación de un organismo competente y de ser así, en qué etapa.²⁰⁷ Un marco multilateral de política de competencia, aun sin la obligación de adoptar una legislación nacional en la materia, sería una fuente útil de asistencia a los países abocados a la elaboración y/o aplicación de una legislación, facilitando asimismo la cooperación entre los países que ya tuvieran regímenes de competencia establecidos.²⁰⁸

79. Diversas opiniones se expresaron sobre las demás posibilidades que existían aparte de la de exigir la adopción de una legislación completa sobre competencia y la creación de una autoridad de la competencia a nivel nacional. Por ejemplo, puesto que los acuerdos de cooperación eran normalmente instrumentos concertados entre gobiernos, teóricamente la cooperación podría estar a cargo de un organismo público o un ministerio, en lugar de una autoridad de la competencia.²⁰⁹ O bien, en lugar de que cada Miembro de la OMC tuviera su legislación sobre competencia y su autoridad encargada de la observancia, las autoridades e instrumentos jurídicos regionales, como el Mercado Común del África Meridional y Oriental (COMESA)²¹⁰, podrían cumplir los requisitos del marco multilateral.²¹¹ En cualquier caso, la idea de que todos los Miembros de la OMC debían tener

²⁰⁰ M/18, párrafo 53.

²⁰¹ M/18, párrafo 68.

²⁰² M/18, párrafos 59 y 72.

²⁰³ M/18, párrafo 67.

²⁰⁴ M/18, párrafo 72.

²⁰⁵ M/18, párrafo 66.

²⁰⁶ M/18, párrafo 50.

²⁰⁷ M/18, párrafos 62 y 66.

²⁰⁸ M/18, párrafos 81 y 82.

²⁰⁹ M/18, párrafo 82.

²¹⁰ M/18, párrafo 60.

²¹¹ M/18, párrafo 67.

una ley sobre competencia no significaba que la misma tuviera que abarcar todos los tipos de conducta anticompetitiva; la única práctica que debía abordarse de alguna forma era la de los cárteles intrínsecamente nocivos²¹², de ser posible tanto nacionales como internacionales.²¹³ No era estrictamente necesario crear un órgano administrativo denominado autoridad de la competencia, bastaba con definir una capacidad de observancia, suficientemente dotada.²¹⁴

80. También se dijo que la asistencia técnica no sólo era un elemento necesario sino también una condición previa para que la cooperación tuviera éxito, en particular en lo que atañe a la cooperación entre países que disponen de una autoridad encargada de la competencia y los que no la poseen. En particular, la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo que no cuentan con leyes ni autoridades de la competencia les permitiría evaluar los efectos de una cooperación más amplia, por ejemplo en relación con los tipos de información que podrían intercambiar.²¹⁵ La creación de capacidad era indispensable para que los países en cuestión pudieran optar por el sistema jurídico que mejor se adaptara a sus condiciones y que les permitiera luchar eficazmente contra los cárteles intrínsecamente nocivos, así como para participar en los esfuerzos en favor de la competencia.²¹⁶

81. En cuanto a la relación entre los acuerdos de cooperación bilaterales, regionales y multilaterales, se señaló que ninguno de estos acuerdos debía entenderse en forma exclusiva y que, de hecho, se complementaban.²¹⁷ Los acuerdos bilaterales y regionales podían servir de punto de partida para un marco multilateral.²¹⁸ Además, todo marco multilateral se beneficiaría de la existencia complementaria de acuerdos bilaterales y regionales de cooperación²¹⁹, en particular cuando los acuerdos regionales, como era el caso de COMESA, reemplazaban los regímenes de competencia nacionales.²²⁰ Si bien la cooperación general, los debates y los análisis colectivos podían tener lugar de manera útil tanto a nivel multilateral como regional y bilateral²²¹, una opinión fue que los acuerdos bilaterales y regionales eran más aptos para la formulación de compromisos detallados de cooperación en casos concretos que un marco multilateral, de evolución más gradual.²²² También se hizo notar que los acuerdos bilaterales y regionales existentes estaban limitados a los países desarrollados, por lo que, a falta de un acuerdo multilateral, los países en desarrollo quedarían excluidos de los beneficios de la cooperación.²²³

²¹² M/18, párrafo 74.

²¹³ M/18, párrafo 80.

²¹⁴ M/18, párrafo 67.

²¹⁵ M/18, párrafo 65.

²¹⁶ M/18, párrafo 73.

²¹⁷ M/18, párrafos 51, 53, 50 y 61.

²¹⁸ M/18, párrafo 52.

²¹⁹ M/18, párrafos 59 y 68.

²²⁰ M/18, párrafo 60.

²²¹ M/18, párrafo 67.

²²² M/18, párrafos 50, 67 y 68.

²²³ M/18, párrafo 52.

82. En lo tocante a si la OMC era un foro apropiado para tratar las cuestiones de cooperación en materia de competencia, se señaló que el número elevado de Miembros de la Organización²²⁴, y el conocimiento de la misma sobre las cuestiones relacionadas con el comercio²²⁵, la habilitaban para ocuparse de las prácticas anticompetitivas que socavaban el comercio y el desarrollo.²²⁶ Se dijo, por otra parte, que la diversidad de la composición de la OMC podía interferir en la viabilidad de un marco multilateral²²⁷, especialmente que un enfoque vinculante sostenido por un mecanismo de solución de diferencias podría no tener en cuenta los distintos criterios adoptados por los Miembros de la OMC en materia de política de competencia.²²⁸ También se expresó que, en todo caso, la cooperación en el seno de la OMC era un proceso a largo plazo y progresivo²²⁹, y que los Miembros sólo podían considerar un desarrollo paulatino²³⁰ de la cooperación multilateral.²³¹

83. Se señaló que existía asimetría de poder e intereses entre los países desarrollados y los países en desarrollo, lo que planteaba el problema de las perspectivas de una cooperación para la política de competencia en el marco de la OMC, con un mínimo de salvaguardias apropiadas.²³² Al responder, se dijo que la existencia de tal asimetría no era únicamente una cuestión de "Norte y Sur", sino que existía también entre los países desarrollados, así como entre los países en desarrollo.²³³ Se observó asimismo que los cárteles internacionales eran generalmente nocivos para todas las economías donde actuaran y que, en consecuencia, existía una clara simetría de intereses entre los países en desarrollo y los países desarrollados a la hora de abordar estas cuestiones.²³⁴

84. Se expresó la opinión de que existían vínculos positivos entre las modalidades propuestas de cooperación voluntaria en el marco de la OMC y otros elementos del párrafo 25 de la Declaración de Doha. Uno de estos vínculos, de importancia decisiva, se refería a la asistencia técnica y la creación de capacidad, en ambos casos como condición previa a la cooperación voluntaria, a la vez que elemento inseparable y beneficio de la cooperación. En particular, la creación de capacidad constituía una forma de cooperación entre las autoridades establecidas y los países que se planteaban su establecimiento.²³⁵ Ciertas formas generales de cooperación, no vinculadas a casos concretos, por ejemplo en el Comité de Política de Competencia de la OMC, podrían efectivamente promover la

²²⁴ M/18, párrafo 50.

²²⁵ M/18, párrafo 50.

²²⁶ M/18, párrafos 50 y 70.

²²⁷ M/18, párrafos 62 y 63.

²²⁸ M/18, párrafo 63.

²²⁹ M/18, párrafos 53 y 66.

²³⁰ M/18, párrafo 50.

²³¹ M/18, párrafos 64 y 52.

²³² M/18, párrafos 63 y 75.

²³³ M/18, párrafo 71.

²³⁴ M/18, párrafo 80.

²³⁵ M/18, párrafos 67 y 71.

creación de capacidad.²³⁶ También se examinó la relación existente con los principios fundamentales de transparencia y no discriminación.²³⁷

IV. APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRESIVO DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA COMPETENCIA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO MEDIANTE LA CREACIÓN DE CAPACIDAD

85. Este punto fue discutido por el Grupo de Trabajo en sus reuniones celebradas los días 23 y 24 de abril de 2002. Presentaron comunicaciones escritas sobre el punto los representantes de Australia, el Canadá, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, Corea, Egipto, los Estados Unidos, el Japón, Rumania y Tailandia (documentos W/190, 183, 184, 189, 187, 185, 186, 181/Rev.1 y 188, respectivamente). Además, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí una nota de antecedentes preparada por la Secretaría (documento W/182) sobre el apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad. Formularon declaraciones orales o hicieron preguntas los representantes de Costa Rica; el Ecuador; Filipinas; Guatemala; Honduras; Hong Kong, China; la India; Jamaica; Jordania; Malasia; Marruecos; Noruega; el Pakistán; la República Checa; Sudáfrica; Suiza; y Trinidad y Tabago. Los representantes de la OCDE ofrecieron información actualizada acerca de las actividades pertinentes de esa organización.

86. Las deliberaciones sobre este punto abarcaron cuestiones muy variadas, entre ellas las siguientes: i) la distinción entre el apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad, al que se refiere el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, y la asistencia técnica y la creación de capacidad de conformidad con el párrafo 24 de la Declaración; ii) las necesidades de creación de capacidad y los desafíos y dificultades encontrados en la aplicación de una política de competencia por los países en desarrollo y en transición; iii) las características y limitaciones de los actuales programas de creación de capacidad; iv) la naturaleza, la estructura y la ejecución de los programas futuros; v) la relación existente entre la creación de capacidad y otros aspectos de un eventual marco para la política de competencia.

87. Con respecto a la distinción que correspondía trazar entre el elemento de apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad, mencionado en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha, y el referente a la asistencia técnica y la creación de capacidad conforme al párrafo 24 de la Declaración, el Presidente sugirió que, en cuanto al primer punto (la creación de capacidad a que se refiere el párrafo 25), la tarea del Grupo de Trabajo consistía en formular y aclarar las cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del papel de los organismos encargados de la competencia y desarrollar una cultura de la competencia en los países en desarrollo, tema ya tratado por el Grupo de Trabajo durante el último par de años. El segundo punto, en cambio, se refería a las actividades que se emprenderían, en particular, en el período previo a la Quinta Conferencia Ministerial, a efectos de ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados a "evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus políticas y objetivos de desarrollo", así como para contribuir a su desarrollo humano e institucional. En consecuencia, las cuestiones tales como las necesidades específicas de seminarios u otras formas de asistencia que hicieran falta a corto o mediano plazo podrían tratarse más adecuadamente en las discusiones del Grupo de Trabajo referentes a la creación de capacidad conforme al párrafo 24 de la Declaración

²³⁶ M/18, párrafo 67.

²³⁷ M/18, párrafos 55, 66, 74 y 82.

Ministerial de Doha. El Presidente destacó que lo anterior no era más que su interpretación personal.²³⁸

88. Con respecto a las necesidades de creación de capacidad y a los desafíos y dificultades encontrados en la aplicación de una política de competencia por los países en desarrollo y en transición, se dijo que suponía un desafío importante crear confianza en los mercados y fomentar la comprensión de la contribución de la política de competencia al desarrollo económico sostenible. No obstante, cuando los países que habían impulsado normas de competencia con éxito se sumaban a esos esfuerzos las perspectivas de éxito eran mucho mayores. Lo mismo cabía decir de la formulación de un marco general de política de competencia adecuado para la situación económica específica de cada país. La asistencia técnica era sólo una de las diversas formas interrelacionadas de cooperación internacional contempladas en la Declaración de Doha. Además, era importante señalar que los programas eran más eficientes si se basaban en asociaciones efectivas entre el donante y el beneficiario. Existía una creciente necesidad de acceso a la información, transferencia de conocimientos prácticos sobre política de competencia, etc., lo cual sólo podía lograrse mediante el aumento de la cooperación técnica, incluso en la OMC.²³⁹ Se sugirió que confirmaba esta tendencia un estudio realizado por la OCDE en 2001.²⁴⁰

89. Se indicaron diversas necesidades y problemas de carácter más concreto. En primer lugar, con respecto a la redacción de textos jurídicos, muchos países, en particular los países en desarrollo y menos adelantados, carecían de personal adecuado con los conocimientos y la experiencia necesarios para poder preparar legislación nacional en materia de competencia.²⁴¹ En segundo lugar, en relación con el establecimiento de una autoridad encargada de la competencia responsable de la aplicación y observancia de la legislación nacional en materia de competencia, entre los problemas encontrados se contaban la escasez de recursos, la dificultad para desarrollar y mantener los conocimientos técnicos necesarios, y la falta de la necesaria infraestructura financiera y material.²⁴² En tercer lugar, para algunos países los gastos asociados a la aplicación y observancia de una legislación nacional sobre competencia se consideraban superiores a los beneficios.²⁴³ En cuarto lugar, muchos países en desarrollo se enfrentaban a la falta de promoción de la competencia y de una cultura de la competencia.²⁴⁴ Con el fin de resolver esas dificultades, el alcance de la asistencia técnica necesaria podría abarcar desde la asistencia en la elaboración de una ley de competencia, el establecimiento de autoridades competentes y la formación integral de su personal hasta la aplicación y observancia de dicha ley. Los países en desarrollo debían tener acceso a actividades de creación de capacidad que generasen un grupo cualificado de funcionarios, en condiciones de redactar la legislación nacional en materia de competencia. El asesoramiento técnico, la capacitación, la asistencia y la cooperación de organizaciones internacionales y de países que poseyeran autoridades encargadas de la competencia expertas y con experiencia constituían recursos útiles. En particular, la asistencia podía adoptar la forma del intercambio de legislación nacional en materia de competencia y de asistencia relativa a la identificación de los principales elementos que convendría introducir en la legislación, incluidas las

²³⁸ M/17, párrafo 3.

²³⁹ M/17, párrafo 5.

²⁴⁰ M/17, párrafo 40. Para un examen de los elementos conexos del estudio de la OCDE, véase *infra*.

²⁴¹ M/17, párrafos 6, 7 y 12.

²⁴² M/17, párrafos 6, 7, 10 y 12.

²⁴³ M/17, párrafo 7.

²⁴⁴ M/17, párrafos 7, 8 y 10.

medidas y sanciones administrativas, penales y civiles; la identificación de los foros administrativos y judiciales de las actuaciones judiciales; y los procedimientos para el intercambio de información. Debían hallarse medios de garantizar que los beneficios de aplicar una ley nacional de competencia fueran superiores a los costos que entrañaría tal aplicación. Ello exigiría explicar a las partes interesadas pertinentes los beneficios y desventajas de una legislación nacional en materia de competencia.²⁴⁵ Deberían tenerse presentes dos principios al prestar apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia de los países en desarrollo mediante la creación de capacidad. En primer lugar: la flexibilidad, en el sentido de que no sirve un "enfoque único válido para todos", dado que cada país debería poder elegir la manera de aplicar un régimen de competencia que corresponda a su situación económica y a sus objetivos de desarrollo. En segundo lugar: la progresividad, en el sentido de permitir que los países en desarrollo adopten un enfoque gradual del examen, la promulgación y la aplicación de leyes sobre competencia.²⁴⁶ Una ayuda realmente útil debía ser de largo plazo, adaptada a las necesidades locales y centrada en el acopio de conocimiento interno.²⁴⁷

90. Con respecto a la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la competencia, se dijo que deberían desplegarse esfuerzos en tres direcciones. En primer lugar, era necesario promover y poner de relieve continuamente la positiva contribución de la ley y la política de competencia al desarrollo económico, ya que en muchos países todavía no se había comprendido bien la relación entre ambos. En segundo lugar, era necesario afianzar la capacidad de los organismos en un país o región para formar al personal de las autoridades encargadas de la competencia en forma continua. También era necesario que participasen instituciones de formación profesional en el campo del derecho y la economía que tuvieran su sede en la región o país de que se tratara. Tales instituciones no sólo estarían en condiciones de proporcionar formación de modo regular y continuo, sino que también ayudarían a crear un clima intelectual de apoyo a la política de competencia, pondrían en contacto con el derecho y la economía de competencia a los estudiantes, muchos de los cuales podrían considerar la posibilidad de un empleo en la autoridad encargada de la competencia, y proporcionarían capacidad institucional en materia de investigación y testimonio especializado. En tercer lugar, era necesario afianzar los vínculos existentes entre las autoridades encargadas de la competencia. El aprendizaje más eficaz tenía lugar como resultado del contacto entre profesionales de diferentes jurisdicciones de competencia. Por ejemplo, en relación con los programas de cesión de funcionarios a largo plazo, además de los evidentes beneficios de contar con un funcionario experimentado de un organismo antimonopolio en el lugar, esto garantizaba que el "creador de capacidad" adquiriera una comprensión del país al que prestaba asistencia, lo que aseguraba un vínculo duradero entre las autoridades encargadas de la competencia de los respectivos países y ello, a su vez, significaba que podría seguir solicitándose la asistencia mucho tiempo después de que el encargado de crear capacidad hubiera retornado a su país de origen.²⁴⁸ Fue objeto de críticas el actual modelo de asistencia técnica, conforme al cual se enviaba a expertos extranjeros a un país o región para intervenir en seminarios cortos. Se expresó la opinión de que tales seminarios eran demasiado breves y, con frecuencia, el experto no estaba suficientemente familiarizado con el sistema jurídico y económico ni con las prioridades de la política del país o región en cuestión.²⁴⁹

²⁴⁵ M/17, párrafos 7 y 8.

²⁴⁶ M/17, párrafos 7, 13 y 30.

²⁴⁷ M/17, párrafos 8 y 9.

²⁴⁸ M/17, párrafo 10.

²⁴⁹ M/17, párrafo 10.

91. Con respecto a las necesidades específicas de los distintos países, se debatieron varias experiencias nacionales.²⁵⁰ Ello puso de relieve los obstáculos relacionados con los recursos humanos²⁵¹ y la necesidad de fomentar una cultura de la competencia entre los protagonistas del mercado, así como en todos los sectores relacionados con la aplicación de la ley.²⁵² Se dijo que la promoción de una cultura de la competencia no exigía necesariamente la adopción en la OMC de un marco multilateral sobre política de competencia²⁵³, por otra parte, se dijo también que dicho marco podía servir de ayuda a este respecto.²⁵⁴

92. Con respecto a los actuales programas de creación de capacidad, diversos Miembros ofrecieron descripciones detalladas de sus actividades de asistencia técnica²⁵⁵, incluidos Miembros que habían pasado de ser beneficiarios a ser proveedores de asistencia técnica.²⁵⁶ Reconociendo que no servía un enfoque "único y válido para todos", habían adaptado sus programas de asistencia técnica a los diferentes entornos jurídicos, económicos y políticos que existían en los distintos países.²⁵⁷

93. Se hizo referencia al estudio ya mencionado de la OCDE, que suministraba información sobre: i) la asistencia técnica suministrada por los Miembros de la OCDE a aquellos que no lo eran en el período 1999-2000, y ii) los puntos de vista de las delegaciones con respecto a los medios más efectivos de suministrar dicha asistencia. Como resultado del estudio se habían planteado las siguientes cuestiones fundamentales: i) un mayor número de países y organizaciones estaba participando en la labor de asistencia técnica y creación de capacidad; ii) ello planteaba importantes consideraciones de coordinación y financiación; iii) los problemas surgidos en la esfera de la financiación requerían una estrategia con múltiples facetas, conforme a la cual los prestadores reforzaran las actividades de los demás en cada oportunidad y aumentaran las actividades destinadas a que se comprendiese mejor la política de competencia. La estrategia debería aprovechar toda oportunidad para llamar la atención sobre los vínculos existentes entre la competencia y esferas tales como el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, la creación de industrias de infraestructura, la desreglamentación, la privatización, la política comercial, la educación, la salud, la propiedad intelectual, etc.; iv) el aumento de la coordinación podría potenciar la eficiencia global de la aportación de asistencia técnica y reducir la duplicación mediante una mayor comunicación y cooperación. A este respecto, la unidad de divulgación de la OCDE esperaba investigar activamente las diversas opciones para cooperar más intensamente con el Grupo de Trabajo, así como con la UNCTAD, el Banco Mundial y los diferentes organismos encargados de la observancia; v) la forma óptima de la asistencia técnica y la creación de capacidad dependía de varios factores, incluida la etapa de desarrollo del país beneficiario tanto de manera general como en la esfera específica de la política de competencia. En el estudio se había llegado a la conclusión de que, en las primeras etapas, antes de que se hubiera promulgado una ley de competencia, o incluso antes de que se reconociera la necesidad de una política de competencia amplia, podrían ser de ayuda las conferencias de alto nivel y

²⁵⁰ M/17, párrafos 6, 11 y 12.

²⁵¹ M/17, párrafo 6.

²⁵² M/17, párrafos 11 y 14.

²⁵³ M/17, párrafo 14.

²⁵⁴ M/17, párrafo 39.

²⁵⁵ M/17, párrafos 18, 19, 21, 22, 23 y 24.

²⁵⁶ M/17, párrafos 20 y 24.

²⁵⁷ M/17, párrafo 20.

las visitas de corta duración. En cambio, en la etapa de elaboración de una ley o reglamento de competencia y del establecimiento de un organismo, los servicios de asesores a más largo plazo así como las visitas de estudio de corta duración resultaban útiles. Para aquellos países que se encontraran en una etapa más avanzada del desarrollo de una política de competencia y que estuvieran, por ejemplo, experimentando dificultades en cuanto a la aplicación de la legislación debido a la falta de conocimientos técnicos o de una cultura de la competencia, tenían un especial valor las conferencias de alto nivel, los exámenes realizados por homólogos y los talleres. Los beneficios de los países receptores parecían estar directamente vinculados a la duración de la asistencia técnica. No obstante, los resultados del estudio mostraron que pocos prestadores de asistencia técnica tenían los recursos necesarios para proporcionar asistencia a largo plazo, dado que era especialmente costosa.²⁵⁸

94. Con respecto a la naturaleza, la estructura y la ejecución de los programas futuros, se dijo que: i) debían respetarse los diferentes enfoques y medidas adoptados por cada país con el objetivo común de promover la política de competencia; ii) era de la mayor importancia la aportación de programas e instrumentos adecuados de asistencia técnica, especialmente aquellos que reflejaban las necesidades de los países en desarrollo; iii) en la prestación de asistencia técnica y la creación de capacidad, era conveniente compartir principios y enfoques comunes con respecto a la cooperación.²⁵⁹

95. Se dijo que en el proceso de investigación la asistencia podría adoptar formas sumamente variadas: i) becas de capacitación académica y profesional; ii) pasantías en sedes de autoridades encargadas de la competencia para adquirir experiencia; iii) la necesidad de recibir visitas de personal de organismos con experiencia que prestase orientación y asistencia, particularmente sobre cuestiones de procedimiento, en los primeros años de existencia de los organismos encargados de la competencia recién establecidos; iv) asistencia financiera y servicios de especialistas para cursos prácticos de capacitación orientados a grupos específicos, como abogados, economistas y jueces; v) asistencia en la organización de los cursos prácticos para grupos de productores y consumidores; y vi) orientación para el desarrollo de una base de datos de información en los nuevos organismos encargados de la competencia. En función del problema de la elevada rotación de personal de muchos países en desarrollo, se precisaba un enfoque más sostenible de la capacitación. También sería conveniente el establecimiento de una institución que pudiera contar con personal experto en competencia proveniente de regímenes maduros. Dichos expertos podían tener el carácter de asociados a la institución, y dar conferencias de vez en cuando sobre temas específicos. Tal institución podría organizar cursos modulares intensivos de carácter rotativo, dirigidos a audiencias pequeñas: asociaciones de abogados, economistas y expertos en comercio, tecnócratas gubernamentales, y otros. También se sugirió que los institutos y universidades de los países en desarrollo introdujesen cursos sobre derecho y política de competencia con la ayuda de especialistas de países cuyos regímenes de competencia fuesen más experimentados. De este modo, se desarrollaría la capacidad interna de proporcionar formación.²⁶⁰

96. Se hizo referencia a la duración de los programas. Por motivos de confidencialidad, sólo se podía recibir a los pasantes durante un período de un par de semanas. Sin embargo, la colocación de asesores en nuevos organismos antimonopolio durante un período de más de seis semanas era el modo más eficaz de conseguir las metas de la asistencia técnica. Tal asistencia era particularmente eficaz cuando los asesores eran economistas o abogados experimentados de autoridades antimonopolio establecidas. Con el tiempo, tales asesores se familiarizaban con la ley antimonopolio de un país, sus

²⁵⁸ M/17, párrafo 40.

²⁵⁹ M/17, párrafo 17.

²⁶⁰ M/17, párrafo 15.

instituciones, sus mercados y los problemas singulares a que se enfrentaba esa concreta autoridad antimonopolio. Además, con el paso del tiempo, los asesores residentes a largo plazo eran más eficaces porque estaban en condiciones de ganarse el respeto y la confianza de la nueva autoridad antimonopolio. Sin embargo, en algunos países, las limitaciones presupuestarias o los deseos del país anfitrión eran tales que el uso de asesores a largo plazo no había sido posible. Si bien no era tan eficaz como la asistencia a largo plazo, la asistencia a corto plazo podía resultar eficaz en unas cuantas esferas clave. En particular, los asesores a corto plazo podían ser eficaces durante la fase de redacción de las leyes y durante la fase de diseño institucional de una autoridad antimonopolio. Además, las misiones a corto plazo integradas por abogados y economistas que organizaban seminarios y talleres interactivos sobre las técnicas de investigación también habían sido eficaces, en particular cuando implicaban el envío de un experto de determinada rama de producción a una autoridad antimonopolio recién establecida cuando se había planteado un caso en el mismo sector. En general, las conferencias no habían resultado tan eficaces como la asistencia a largo o a corto plazo ofrecida, en particular cuando se hacían en forma de lecciones magistrales centradas en la teoría general, en lugar de en su aplicación al mundo real, y cuando los conferencistas tendían a no estar familiarizados con el sistema jurídico del país receptor. Los programas de "servicios completos" que duraban varios días resultaron habitualmente ineficaces porque planteaban conceptos o ideas importantes difíciles de llevar a la práctica en diferentes entornos. Sin embargo, había unas pocas situaciones en las que las conferencias se consideraban particularmente eficaces, incluidos los seminarios de análisis de casos tales como los ofrecidos por la OCDE en Viena, en los que estaban presentes los miembros de los organismos, se analizaban los casos reales que dichos miembros estaban tratando y recibían retroalimentaciones; así como las conferencias nacionales celebradas en las fases iniciales del proceso legislativo de un país, en las que los expertos locales y extranjeros debatían los pros y los contras de la legislación antimonopolio o los detalles concretos de la legislación propuesta.²⁶¹

97. Durante las declaraciones reseñadas y en la deliberación correspondiente se manifestó que: i) el sistema "único y válido para todos" respecto de la organización y suministro de asistencia técnica y creación de capacidad no era apropiado. La asistencia técnica funcionaba mejor si se adaptaba a las necesidades y situaciones particulares del país receptor y, además, ningún modelo único de competencia era adecuado para todas las circunstancias. Asimismo, era importante que la creación de capacidad se considerara como un proceso a largo plazo²⁶²; ii) la evaluación sistemática de las necesidades era esencial para las actividades de creación de capacidad eficaces.²⁶³

98. Las cualificaciones de los prestadores de asistencia técnica eran importantes. La experiencia en materia de aplicación de la legislación era fundamental y frecuentemente los prestadores de asistencia técnica del sector privado carecían de ella. Era importante tener una dilatada experiencia, o, al menos, cierta familiaridad y experiencia en cuestiones relacionadas con las exigencias singulares de las economías emergentes y en desarrollo. Se hacía hincapié también en la necesidad de asistencia práctica en la aplicación de la ley, en particular respecto a las técnicas de investigación, las capacidades analíticas, la tramitación de casos, etc.²⁶⁴

²⁶¹ M/17, párrafo 21.

²⁶² M/17, párrafo 26.

²⁶³ M/17, párrafo 27.

²⁶⁴ M/17, párrafo 40.

99. Los representantes de países en desarrollo formularon diversas preguntas a los proponentes de un marco multilateral sobre política en materia de competencia acerca de las iniciativas para acentuar el empeño en favor de la cooperación técnica y la creación de capacidad en la OMC: i) ¿de qué modo exactamente se fortalecería la capacidad institucional de los países en desarrollo?; ii) ¿se limitaría esa creación de capacidad a la política de competencia relativa al comercio o abarcaría también la política de competencia *per se*? ¿Dónde se trazaría la línea divisoria entre ambas?; iii) ¿serían los recursos que se suministrarán para las diferentes formas de asistencia adecuados, oportunos y durar un período suficiente a fin de permitir a los países que se encontraban en diferentes etapas de desarrollo obtener suficiente experiencia y crear la adecuada capacidad?; iv) ¿se determinaría la cantidad de estos recursos?; v) ¿hasta qué punto se tendrían en cuenta las necesidades y objetivos de desarrollo de los países en desarrollo y menos adelantados participantes, a fin de evitar un proceso dirigido por los donantes?; vi) ¿incluiría tal proceso la creación de una organización que coordinara periódicamente la asistencia técnica y la creación de capacidad suministradas a los países en desarrollo, pero que al mismo tiempo mantuviera una relación "en condiciones de igualdad" con los donantes?; vii) qué formas de asistencia técnica y creación de capacidad se suministrarían que permitieran a los países en desarrollo reunir los instrumentos y los conocimientos especializados, y hallar los medios de obtener los recursos necesarios para: a) saber qué información obtener respecto de las prácticas comerciales restrictivas, incluidos los cárteles intrínsecamente nocivos y los abusos de posición dominante o las fusiones originadas en el extranjero que afecten a sus mercados; b) adoptar procedimientos para obtener esa información; c) interpretarla y evaluarla; d) probar que tales prácticas o fusiones eran anticompetitivas frente a los conocimientos técnicos jurídicos y económicos que estarían a disposición de las empresas participantes; e) beneficiarse de la cooperación internacional voluntaria, por ejemplo, obteniendo asistencia en materia de investigación por parte de una autoridad de competencia extranjera referida a la información a su disposición o que pudiera obtener, o mediante la obtención de asistencia judicial; y f) aprender el modo de responder apropiadamente a las solicitudes de cooperación voluntaria de otros países o a la aplicación extraterritorial de las leyes en materia de competencia de otros países. Los países en desarrollo tenían poco conocimiento de lo que entrañaría un marco multilateral sobre política de competencia. Era, pues, quizás demasiado pronto para enunciar en detalle cuáles eran sus necesidades en materia de asistencia técnica. Era inevitable una actividad reiterada de formación sobre diversos aspectos. Cuando mejorase la asistencia técnica, aumentaría en la misma medida la necesidad de comprender más cuestiones y sería necesario prever esa formación adicional.²⁶⁵

100. Se observó que existían muchos instrumentos para crear capacidad y que en algunos casos los objetivos se superponían. La creación de capacidad se centraba en el desarrollo y mejora de la capacidad de una autoridad encargada de la competencia para aplicar la ley y la política de competencia en su jurisdicción. Esto planteaba la cuestión de cómo podría crearse una cultura de la competencia en la administración en su conjunto -el poder judicial, la comunidad empresarial y el público en general- porque la ley y la política de competencia no podían aplicarse en los casos en que la comunidad en su conjunto no tenía una idea de lo que eran las normas de competencia y el comportamiento competitivo. Este aspecto de más largo plazo de la creación de capacidad no era algo que pudiera finalizar o disminuir con el término de la labor del Grupo de Trabajo o con la negociación y aplicación de un acuerdo multilateral. Además, no estaba de por sí vinculado a las normas multilaterales. En ese contexto, era esencial la cooperación entre las autoridades encargadas de la competencia para que los Miembros pudieran ayudar a los países en desarrollo a establecer autoridades encargadas de la competencia y a mejorarlas. A este respecto, uno de los principales objetivos de la asistencia técnica era garantizar que las autoridades del país en desarrollo estuvieran en posición de beneficiarse de la cooperación internacional.²⁶⁶

²⁶⁵ M/17, párrafo 31.

²⁶⁶ M/17, párrafo 33.

101. Con respecto a la relación entre la creación de capacidad y otros aspectos de un eventual marco de política en materia de competencia, se dijo que la cooperación internacional tenía una útil función que cumplir al abordar las consecuencias de la política de competencia planteadas por la mundialización de los mercados. Sin embargo, dada la diversidad del alcance y el énfasis de las políticas de competencia y los instrumentos de aplicación existentes entre los Miembros de la OMC, debían considerarse cuidadosamente la cuantía y las modalidades de la cooperación. Debían tomarse plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados que participaban, y debía proporcionarse la flexibilidad adecuada para atenderlas, como se había encomendado en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha. Esto incluía la posibilidad de no tener una ley de competencia. Se necesitaba asistencia para ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados a evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha en sus políticas y objetivos de desarrollo.²⁶⁷ Los diversos programas de cooperación técnica que habían expuesto los Miembros, en particular los elaborados para aumentar la capacidad y la cooperación técnica a largo plazo, cumplían sólo parcialmente el mandato contenido en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha. En el párrafo 25 se dejaba en claro que la OMC y otras organizaciones internacionales debían participar en la creación de capacidad y la cooperación técnica. A este respecto, debía otorgarse prioridad a la elaboración y aplicación de legislación en materia de competencia, la elaboración y establecimiento de un organismo encargado de aplicar la ley, y al desarrollo de un entorno de competencia, en particular en los países que no tenían una experiencia significativa en esta esfera. Estos elementos debían ser parte de un programa de asistencia técnica coherente que estudiara las necesidades de los receptores, que tuviera en cuenta las diversas necesidades de los países en desarrollo, y que estableciera modalidades para evitar la duplicación. Un elemento importante tanto con respecto al párrafo 24 como al párrafo 25 de la Declaración Ministerial era la evaluación de las consecuencias de la cooperación técnica. Tal actividad debía desempeñarse a todos los niveles, incluso en el plano multilateral, y por lo tanto debía incluirse como un elemento de las modalidades de cooperación y de creación y fortalecimiento de capacidad. Dicho elemento era esencial ya que permitía el reconocimiento de las necesidades especiales de los países en desarrollo, así como del hecho de que no era adecuado un enfoque "único y válido para todos".²⁶⁸ Se dijo que se había trazado correctamente una distinción entre la asistencia técnica y la creación de capacidad, que tenían por objeto potenciar las posibilidades de los países en desarrollo de evaluar mejor las consecuencias de la cooperación multilateral en esta esfera y el apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad. Desde la perspectiva de los países en desarrollo, existía una vinculación entre los dos objetivos que se intentaban alcanzar mediante la asistencia técnica y la creación de capacidad. La naturaleza y la magnitud de las obligaciones contraídas por los Miembros en materia de creación de capacidad en los países en desarrollo, a fin de fortalecer las instituciones encargadas de la competencia para que pudieran aplicar mejor sus leyes nacionales y sacar ventaja de la cooperación internacional en casos de prácticas anticompetitivas de dimensiones internacionales, tendrían una considerable influencia en la evaluación de las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha en sus políticas y objetivos de desarrollo.²⁶⁹

102. También se manifestó la opinión de que llevar a cabo programas eficaces de asistencia técnica y creación de capacidad exigía cierto grado de comprensión común acerca de los principios básicos y que los programas de asistencia técnica y creación de capacidad facilitaban la aclaración de los principios básicos mediante los intercambios de experiencias y el entendimiento mutuo entre los

²⁶⁷ M/17, párrafo 29.

²⁶⁸ M/17, párrafo 30.

²⁶⁹ M/17, párrafo 31.

participantes. En otras palabras, la creación de capacidad y la aclaración de los principios básicos eran complementarias y debían promoverse a la vez.²⁷⁰

D. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 24 DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA

103. El párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Doha establece que los Ministros reconocen la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie el apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, incluidos el análisis y la formulación de políticas para que puedan evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus políticas y objetivos de desarrollo, y el desarrollo humano e institucional. A tal fin, la disposición establece que se trabajará en cooperación con otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales regionales y bilaterales apropiados, para facilitar una asistencia reforzada y dotada de recursos adecuados para responder a esas necesidades. A este respecto, durante cada una de sus reuniones celebradas en 2002, el Grupo de Trabajo recibió informes sobre actividades realizadas en cumplimiento del mandato establecido en el párrafo 24, ya sea de la Secretaría de la OMC, de otras organizaciones intergubernamentales o de Miembros que habían actuado por conducto de canales regionales y bilaterales.

104. Durante el año informaron al Grupo de Trabajo acerca de actividades específicas correspondientes al párrafo 24, efectuadas por su iniciativa o con su colaboración, los siguientes Miembros: Australia²⁷¹, la Comunidad Europea y sus Estados miembros²⁷², Nueva Zelandia²⁷³, el Uruguay²⁷⁴, el Japón²⁷⁵, Corea²⁷⁶, Guatemala²⁷⁷, China²⁷⁸ y la Argentina.²⁷⁹ Además, en cada una de las reuniones del Grupo de Trabajo se presentaron informaciones actualizadas de las actividades pertinentes de la UNCTAD y la OCDE.²⁸⁰

105. En lo que respecta a las actividades de asistencia técnica desarrolladas por la Secretaría de la OMC, un aspecto importante de las que se cumplieron durante el año se refería a la colaboración con otras organizaciones intergubernamentales, en especial la UNCTAD. A este respecto se informó al Grupo de Trabajo, en su reunión celebrada los días 23 y 24 de abril, de un encuentro interinstitucional realizado el 25 de enero de 2002, al que asistieron representantes de la UNCTAD,

²⁷⁰ M/17, párrafo 36.

²⁷¹ M/17, párrafo 46.

²⁷² M/17, párrafo 49.

²⁷³ M/17, párrafo 54.

²⁷⁴ M/19, párrafo 92.

²⁷⁵ M/19, párrafo 93.

²⁷⁶ M/19, párrafo 94.

²⁷⁷ M/19, párrafo 96.

²⁷⁸ M/19, párrafo 97.

²⁷⁹ M/19, párrafo 98.

²⁸⁰ M/17, párrafo 60; M/18, párrafos 93 y 94; y M/19, párrafo 100.

la OCDE y el Banco Mundial, además de la Secretaría de la OMC. Esa reunión tuvo por objeto intercambiar informaciones sobre las actividades proyectadas por cada organización e impulsar un alto grado de cooperación entre las organizaciones participantes en la ejecución de la asistencia técnica en esta esfera, sobre todo a través de seminarios regionales, en cuanto fuera factible y compatible con los criterios de prioridad de cada institución.²⁸¹

106. Con respecto, concretamente, a la cooperación con la UNCTAD, se informó al Grupo que, en la primera parte del año 2002, la UNCTAD había organizado, con la participación de la OMC, una primera serie de seminarios regionales sobre el mandato de Doha acerca del comercio y la política en materia de competencia. Se habían desarrollado en la ciudad de Panamá para los países de América Latina; en Túnez para los países africanos; en Hong Kong, China, para los de Asia; y en Odessa para los de Europa Central y Oriental. Posteriormente, la OMC estaba organizando una segunda serie de seminarios regionales, con participación de la UNCTAD. Hasta la fecha, esto ha comprendido seminarios regionales organizados por la Secretaría de la OMC en la ciudad de Guatemala para los países de América Central²⁸²; en Libreville para los países africanos de habla francesa²⁸³; y en Port-Louis (Mauricio) para los países africanos de habla inglesa. Además, la UNCTAD ha tomado parte en un seminario nacional organizado por la Secretaría de la OMC en China.

107. Además de la función que cumple en estos seminarios regionales y nacionales dedicados específicamente al mandato de Doha sobre el comercio y la política en materia de competencia, la Secretaría ha participado en los siguientes cursos prácticos y seminarios desarrollados durante el año: en los seminarios que la UNCTAD ha realizado en Abu Dhabi para países de la región del Oriente Medio; y en Lusaka para los países de África Meridional; y en una importante conferencia organizada por la Comisión de Comercio Leal de Corea en cooperación con la UNCTAD y la OCDE, en Seúl. Además, en el curso del año la Secretaría aportó módulos referentes al comercio y la política en materia de competencia a los siguientes seminarios y cursos de la OMC que trataron diversos aspectos del Programa de Doha para el Desarrollo: i) un seminario nacional para Nigeria sobre diversos temas comerciales; ii) un curso de la OEA, la OMC y la Universidad de Georgetown para funcionarios comerciales latinoamericanos, en Washington, D.C.; iii) un seminario regional de la CEPA y la OMC sobre diversos temas, realizado en Addis Abeba; dos sesiones especiales del Curso sobre Política Comercial de la OMC realizadas para funcionarios de países africanos de habla francesa y de habla inglesa, en Casablanca y Nairobi, respectivamente; iv) un cursillo para altos funcionarios comerciales organizado por la OMC en cooperación con el Instituto Conjunto en Viena; y vi) varias sesiones ordinarias del Curso sobre Política Comercial de la OMC en Ginebra.

108. Durante el debate de este punto, los Miembros plantearon diversas observaciones y propuestas respecto de los programas de creación de capacidad. Entre muchas otras observaciones²⁸⁴ se sugirió que la asistencia técnica y la creación de capacidad que respondían a las diversas necesidades concretas de los países en desarrollo Miembros ayudarían no sólo a desarrollar y fortalecer los sistemas jurídicos en la esfera de la competencia, sino también a facilitar los debates del Grupo de Trabajo. Se sugería que para elevar al máximo la utilidad de tales actividades, éstas se centraran en las siguientes esferas antes de que tuviera lugar cualquier debate acerca de la posibilidad de llegar a un consenso sobre las modalidades de negociaciones relativas a un marco multilateral sobre política de competencia en el seno de la OMC: i) evaluar la situación actual en los países en

²⁸¹ M/17, párrafo 58.

²⁸² El seminario de la ciudad de Guatemala se organizó en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL).

²⁸³ En este seminario participaron representantes de las Secretarías de la UNCTAD y de la OCDE.

²⁸⁴ Véase M/17, párrafo 52.

desarrollo Miembros respecto al desarrollo de políticas de competencia y la formulación y aplicación de leyes en materia de competencia; ii) ayudar a los países en desarrollo Miembros a desarrollar sistemas jurídicos idóneos y una cultura de la competencia mediante la prestación de servicios de formación a las autoridades nacionales encargadas de la competencia y a otros organismos gubernamentales relacionados con el tema, así como al sector privado e instituciones académicas; iii) analizar la relación recíproca entre la evolución de los mercados y las políticas de competencia en los países en desarrollo Miembros; iv) analizar las consecuencias que tendría un posible acuerdo marco multilateral en el seno de la OMC sobre comercio y desarrollo en los países en desarrollo Miembros, tanto si contaban o no con un marco jurídico nacional bien desarrollado sobre la política de competencia y la economía de mercado; y v) intercambiar información y experiencia sobre la política de competencia entre los Miembros.²⁸⁵ Se hizo hincapié en la importancia de entender el modo en que encajaba la política de competencia en un marco más amplio relativo al establecimiento de sistemas adecuados de gestión de la política económica y el modo en que se vinculaba con otras políticas económicas, tales como la política comercial, la reglamentación de la economía y la protección del consumidor, particularmente a la luz de los problemas planteados por la mundialización y la creciente influencia de la conducta anticompetitiva transfronteriza.²⁸⁶ Se insistió también en la importancia de que las diversas organizaciones participantes en la prestación de asistencia técnica en esta materia colaborasen en el mayor grado posible alcanzando un entendimiento común acerca de sus funciones y sus esferas de responsabilidad respectivas.²⁸⁷ Los Miembros también indicaron diversas necesidades más concretas.²⁸⁸

109. Como otro aspecto de la asistencia técnica y la creación de capacidad, durante el año se pidió que la Secretaría, con la asistencia de un consultor, iniciara un estudio sobre ciertos aspectos referentes a los costos y los beneficios que origina para los países en desarrollo la adopción de un marco multilateral sobre política en materia de competencia concertado en la OMC. El mandato correspondiente al estudio, acordado por el Grupo de Trabajo en su reunión celebrada los días 1º y 2 de julio, es el siguiente:

"Estudio de las cuestiones relativas a un marco multilateral sobre política de competencia"

El estudio tendría por objeto resumir la información disponible que pudiera facilitar una evaluación de los costos y los beneficios de las propuestas formuladas para establecer un marco multilateral sobre política de competencia. Se basaría en la documentación existente y en fuentes públicas, incluidos los estudios y otra documentación preparados por o para la UNCTAD, la OCDE y el Banco Mundial, y versaría sobre los tres elementos principales siguientes:

- a) Examen de las cuestiones referentes a la relación entre la política de competencia en cuanto se refiere al comercio y la política industrial, con inclusión de:

²⁸⁵ M/17, párrafo 52.

²⁸⁶ M/17, párrafo 46.

²⁸⁷ M/17, párrafo 55.

²⁸⁸ Véase M/17, párrafos 48, 50, 51 y 53; M/18, párrafos 87, 88, 89 y 91; y M/19, párrafos 97 y 99.

- todas las concesiones y complementariedades que pudieran surgir entre la aplicación de la política de competencia y el logro de una mayor eficiencia en los países en desarrollo;
 - la experiencia adquirida con respecto a la relación entre la competencia y la política industrial;
 - las repercusiones de las posibles disposiciones sobre no discriminación, transparencia, equidad procesal y cárteles intrínsecamente nocivos en las opciones nacionales de política industrial y económica, y la experiencia nacional a este respecto.
- b) Examen de las cuestiones y reunión de datos empíricos disponibles con respecto a los recursos que exigiría la adopción y aplicación efectiva de un marco multilateral sobre política de competencia, incluidas las disposiciones sobre cárteles intrínsecamente nocivos, transparencia, equidad procesal y respuesta a las solicitudes de cooperación voluntaria.
- c) Repercusiones de la legislación y la política de competencia en las medidas para hacer frente a las prácticas anticompetitivas de las empresas en el contexto de los países en desarrollo."

El estudio se basará en la documentación existente y en la que se obtenga de fuentes públicas, incluida la preparada por otros organismos intergubernamentales.²⁸⁹

110. Posteriormente, se informó al Grupo de Trabajo de que la Secretaría había contratado, para la preparación del estudio solicitado, los servicios de un experto consultor, el Dr. Simon Evenett, Director de Investigaciones Económicas del Instituto de Comercio Mundial de Berna. Los trabajos ya se habían iniciado, y se confiaba en contar con el estudio para el final del año.²⁹⁰

E. INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS NACIONALES

111. Presentaron comunicaciones escritas referentes a este punto Corea y la Argentina (documentos W/189 y 206, respectivamente).

112. Con respecto a la relación entre la política de competencia y el desarrollo, así como las crisis financieras, se dijo que Corea había sufrido una crisis de divisas en 1997. Muchas empresas habían cerrado durante ese período y muchos trabajadores perdido sus empleos. En el seno del sector empresarial se tenía la opinión de que, para mejorar los efectos de la crisis económica había sido necesario relajar la ley de competencia para proteger a las empresas coreanas de los competidores internacionales. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones del FMI y el BIRF, Corea aplicó más intensamente su ley de competencia sobre la base de que una de las razones de la crisis económica del país era que los mecanismos del mercado no habían funcionado correctamente. La Comisión de Comercio Leal de Corea (KFTC) había desempeñado un papel fundamental en la reestructuración de

²⁸⁹ M/18, párrafos 95 a 98.

²⁹⁰ M/19, párrafo 91.

la economía coreana para que fuera una economía de mercado. Había asegurado que en el proceso de privatización se aplicaran los principios de la competencia. Gracias a ello, actualmente el estado de la economía coreana era considerablemente mejor que antes de la crisis económica de 1997. Sobre esta base, la experiencia de Corea a partir de la crisis había puesto de relieve la necesidad e importancia de la política de competencia como pilar y contrapeso de la política industrial, y como baluarte de una vigorosa economía de mercado.²⁹¹

113. También en relación con el tema de la función de la política de competencia en tiempos de crisis, financiera o económica, se dijo que la reciente experiencia de la Argentina había mostrado la importancia de esa política tanto en las épocas buenas como en las malas. En los momentos de dificultades económicas, la tentación de intervenir directamente en los mercados o fijar precios era muy grande para los gobiernos. De hecho, el propio sistema de mercado se ponía algunas veces en tela de juicio. La privatización y la liberalización tan extendidas, particularmente a principios del decenio de 1990, que a menudo solían llevarse a cabo sin prestar la debida atención a la necesidad de competir y a otras disciplinas públicas, había dado lugar a una concentración de la economía, que había traído consigo diversas consecuencias perjudiciales. Las salvaguardias de la competencia siempre se habían introducido demasiado tarde y a este respecto existían muchas deficiencias. En muchos sectores, la concentración había facilitado la formación de cárteles. Después del auge original provocado por la liberalización y la privatización entre 1997 y 2000, la economía dejó de crecer y la productividad fue negativa. Esta experiencia demostró lo que sucedía cuando no se prestaba suficiente atención a la introducción de disciplinas competitivas en períodos de reestructuración económica. Se sugirió que, para recuperar la estabilidad macroeconómica, la Argentina no podría evitar una revolución microeconómica tanto en el sector público como en el privado. Para el éxito futuro era indispensable fomentar el funcionamiento eficiente de los mercados y adoptar nuevas tecnologías. La lección general que se sacaba de la experiencia del país era que el equilibrio macroeconómico era una condición necesaria, pero no suficiente, de la prosperidad. También era necesaria la eficacia a nivel microeconómico, sobre la base de leyes e instituciones sólidas.

²⁹¹ M/17, párrafo 62.

ANEXO 1

TEXTO DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE DOHA (WT/MIN(01)/DEC/1), PÁRRAFOS 23-25

(adoptada el 14 de noviembre de 2001)

INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA

23. Reconociendo los argumentos en favor de un marco multilateral destinado a mejorar la contribución de la política de competencia al comercio internacional y al desarrollo, y la necesidad de potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, como se indica en el párrafo 24, convenimos en que después del quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial se celebrarán negociaciones sobre la base de una decisión que se ha de adoptar, por consenso explícito, en ese período de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones.

24. Reconocemos la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie el apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, incluidos el análisis y la formulación de políticas para que puedan evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus políticas y objetivos de desarrollo, y el desarrollo humano e institucional. A tal fin, trabajaremos en cooperación con otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales regionales y bilaterales apropiados, para facilitar una asistencia reforzada y dotada de recursos adecuados para responder a esas necesidades.

25. En el período que transcurra hasta el quinto período de sesiones, la labor ulterior en el Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia se centrará en la aclaración de lo siguiente: principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, y disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos; modalidades de cooperación voluntaria; y apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad. Se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas.

ANEXO 2

COMUNICACIONES PRESENTADAS AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA EN 2002

<i>Signatura (WT/WGTCP/W/-)</i>	<i>Miembro/otra fuente</i>	<i>Dónde se introdujo (Referencia en las actas)</i>	<i>Tema</i>
W/181 y Rev.1	Rumania	M/17, párrafos 4-5	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/182	Secretaría	M/17, párrafo 4	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/183	Canadá	M/17, párrafos 4 y 19	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/184	CE y Estados miembros	M/17, párrafos 4 y 18	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/185	Estados Unidos	M/17, párrafos 4 y 21	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/186	Japón	M/17, párrafos 4, 16 y 17	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/187	Egipto	M/17, párrafos 4, 7 y 48	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal; disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/188	Tailandia	M/17, párrafos 4 y 6	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/189	República de Corea	M/17, párrafos 4, 20, 47 y 62	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal; disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos; modalidades de cooperación voluntaria
W/190	Australia	M/17, párrafos 44 y 46	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal; disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/191	Secretaría	M/18, párrafo 3	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/192	Secretaría	M/18, párrafo 49	Modalidades de cooperación voluntaria
W/193	CE y Estados miembros	M/18, párrafos 3-5, 51-52	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/194	Suiza	M/18, párrafos 3 y 8	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/195	Japón	M/18, párrafos 49-50	Modalidades de cooperación voluntaria

<i>Signatura (WT/WGTCP/W/-)</i>	<i>Miembro/otra fuente</i>	<i>Dónde se introdujo (Referencia en las actas)</i>	<i>Tema</i>
W/196	México	M/18, párrafos 3 y 29	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/197	UNCTAD	M/18, párrafos 3, 46-47, 49 y 81	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/198	Australia	M/18, párrafos 3 y 11	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/199	Australia	M/18, párrafos 49 y 57	Modalidades de cooperación voluntaria
W/200	República de Corea	M/18, párrafos 3, 7 y 56	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/201	Canadá	M/18, párrafos 3, 10 y 24-25	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/202	Canadá	M/18, párrafos 49 y 53	Modalidades de cooperación voluntaria
W/203	Estados Unidos	M/18, párrafos 3 y 6	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/204	Estados Unidos	M/18, párrafos 49 y 55	Modalidades de cooperación voluntaria
W/205	Tailandia	M/18, párrafos 3, 9 y 70	Modalidades de cooperación voluntaria
W/206	Argentina	M/18, párrafo 99	Balance de las experiencias nacionales
W/207	OCDE	M/18, párrafos 3 y 48	Modalidades de cooperación voluntaria
W/208	OCDE	M/18, párrafos 49 y 82	Disposiciones sobre los cárteles intrínsecamente nocivos
W/209	Secretaría	M/19, párrafo 3	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/210	Nueva Zelandia	M/19, párrafos 3 y 4	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/211	Australia	M/19, párrafos 3 y 5-6	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/212	República de Corea	M/19, párrafos 3 y 7-11	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/213 y Rev.1	Tailandia	M/19, párrafos 3 y 12	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/214	Suiza	M/19, párrafos 3 y 13-14	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/215	India	M/19, párrafos 3 y 16-17	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal

<i>Signatura (WT/WGTCP/W/-)</i>	<i>Miembro/otra fuente</i>	<i>Dónde se introdujo (Referencia en las actas)</i>	<i>Tema</i>
W/216	India	M/19, párrafos 3 y 16-17	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/217	Japón	M/19, párrafos 3 y 15	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/218	Estados Unidos	M/19, párrafos 3 y 22-23	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/219	Estados Unidos	M/19, párrafos 3 y 18-21	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/220	Sudáfrica	M/19, párrafos 3 y 30-32	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/221	OCDE	M/19, párrafos 3 y 58	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal
W/222	CE y Estados miembros	M/20 (pendiente de publicación)	Principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal